

La Comisión de la Verdad y Reconciliación y los medios de comunicación Ayacucho y Lima

Antonio Zapata Velasco

Documento de trabajo



**LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y
RECONCILIACIÓN Y LOS MEDIOS
DE COMUNICACIÓN
AYACUCHO Y LIMA**

ANTONIO ZAPATA VELASCO

Documento de trabajo N° 158

- © INSTITUTO DE ESTUDIOS PERUANOS, IEP
Horacio Urteaga 694, Lima 11
Teléfonos 332-6194 / 424-4856
Fax (51-1) 332-6173
Correo-e: <publicaciones@iep.org.pe>
Web: <www.iep.org.pe>
- © DED SERVICIO ALEMÁN DE COOPERACIÓN SOCIAL-TÉCNICA
Programa Servicio Civil para la Paz (ZFD)
Calle Los Manzanos 119, San Isidro, Lima 27
Casilla Postal 18-1013. Lima 18
Teléfono: (51-1) 264 4490 / Fax: (51-1) 264 5512
Correo-e: <per@ded.de>
- © ANTONIO ZAPATA VELASCO

ISBN: 978-9972-51-282-7

ISSN: 1022-0356 (Documento de Trabajo IEP)

ISSN: 1022-0429 (Serie Sociología y Política)

Impreso en el Perú
Lima, noviembre de 2010
300 ejemplares

Hecho el depósito legal
en la Biblioteca Nacional del Perú N.º 2010-14550

Registro del Proyecto Editorial
en la Biblioteca Nacional N.º 11501131000994

ZAPATA VELASCO, Antonio
*La Comisión de la Verdad y Reconciliación y los medios de
Comunicación. Ayacucho y Lima.* Lima, DED; IEP, 2010.
Documento de Trabajo, 158. Serie Sociología y Política, 46)

CVR, LIMA; MEDIOS DE PRENSA; LIMA; AYACUCHO

WD/05.01.01/SP/46

ÍNDICE

RESUMEN	7
INTRODUCCIÓN.....	9
I. AYACUCHO	11
1. Antecedentes.....	11
2. Los medios de comunicación durante los años noventa	13
3. Constitución e integrantes de la CVR	15
4. Reacción ayacuchana.....	19
5. La sede regional de Ayacucho.....	22
6. Prensa local e Informe Final de la CVR.....	26
7. Situación actual.....	34
II. LIMA	39
1. Importancia política de la CVR.....	39
2. Las recomendaciones en los medios de comunicación.....	42
3. Entidades públicas y recomendaciones: Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN) y Consejo de Reparaciones (CR)	44
4. Retrato de la implementación	47
5. Nuestros días.....	50
III. CONCLUSIÓN.....	53
IV. BIBLIOGRAFÍA.....	59

RESUMEN

LA FORMACIÓN DE LA COMISIÓN DE LA VERDAD Y RECONCILIACIÓN (CVR) despertó muchas expectativas que no se han cumplido, debido a problemas políticos que trascienden el trabajo de la Comisión. Pero muchas personas han ido decepcionándose con el correr de la década y hoy realizan un balance más negativo y pesimista que antaño.

Por su parte, los periodistas tienen posiciones distintas frente a las conclusiones de la CVR. En buena medida, sus divergencias reproducen las posiciones que adoptaron durante la guerra. Es decir, los periodistas han continuado manejándose en la misma ubicación política que adoptaron durante la guerra.

Mientras tanto, los medios de prensa han evolucionado más que los mismos periodistas. Han aparecido conglomerados que incluyen medios impresos, radio y televisión. Esa mayor cobertura ha permitido un nuevo concepto de periodismo, según el cual el medio ofrece una variedad de opiniones sobre temas que ha escogido para poner en agenda. Por ello, se encuentran medios de prensa que registran opiniones distintas frente al Informe Final de la CVR.

Mas los dueños de medios de prensa han cambiado poco con relación al corrupto periodo de los noventa. No son afectos a los temas de DDHH y su orientación ha sido hacia el progresivo silencio de las conclusiones de la CVR.

Este rechazo de los dueños de medios se refuerza con la oposición a la CVR de la mayor parte de la clase política. Sobre todo los políticos con poder han sido indiferentes, si no hostiles, ante el Informe de la Comisión.

Ambos, dueños de medios y políticos, se han apoyado en una relativa indiferencia ciudadana ante los temas de DDHH. Mucha gente prefiere olvidar y no recordar un pasado doloroso. Por ello, el ejercicio de memoria se vincula, en ciertos medios de prensa, con los intereses de las ONG.

Estas entidades son percibidas como actores con poder y, entre ciertos sectores, despiertan celos, envidias y recelos. Muchos periodistas han percibido vasos comunicantes entre las ONG y la CVR, alimentándose la segunda de la reputación de las primeras.

Los periodistas comprensivos del Ejército Peruano hallan insuficiente el Informe porque no considera el punto de vista de los militares. Ellos sostienen que actuaron en defensa del Estado, mientras que el Informe los presenta como si hubieran sido una fuerza beligerante más.

Asimismo, el Informe es criticado por los periodistas comprensivos de la actuación de Sendero Luminoso. También sostienen que la CVR tuvo un resultado fallido, porque su Informe Final no da cuenta de las verdaderas motivaciones de los

insurrectos y las atribuye al fanatismo, sin resaltar las condiciones estructurales de la violencia en el Perú.

Así, los periodistas que simpatizan con las fuerzas enfrentadas militarmente acaban coincidiendo en un punto: su común oposición a la CVR. Interpretar esa coincidencia se convierte en un punto argumental de las conclusiones que presentamos más adelante.

INTRODUCCIÓN

EL PRESENTE TRABAJO nace de un acuerdo entre el DED y el IEP para realizar dos estudios sobre la implementación de las recomendaciones emitidas en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. El primer estudio ha estado a cargo del sociólogo Rodrigo Barrenechea y ha analizado la política de reparaciones en municipalidades ayacuchanas. Este segundo trabajo trata sobre los medios de prensa y el Informe Final de la CVR; ha estado guiado por los siguientes propósitos:

En primer lugar, analizar los mensajes aparecidos en los medios a raíz de la CVR, intentando captar tendencias y ejes de reflexión. En este sentido, la intención ha sido conocer a los actores de la comunicación y la naturaleza de sus planteamientos.

A continuación, precisar las dificultades políticas y metodológicas que, a juicio de los periodistas, han limitado la implementación de las recomendaciones de la CVR. Para ello, el trabajo se pregunta por el estado actual de las reparaciones y las razones para su retraso, conversando en profundidad con distintos agentes del proceso de comunicación.

La primera de nuestras hipótesis fue que las posiciones posconflicto correspondían a las posturas que estos mismos agentes habían desarrollado durante la guerra. En este sentido, la actitud política actual prolonga ideas fuerza construidas en el periodo anterior, que es el clave en la conformación de las mentalidades. A la luz del estudio, esta hipótesis se sostiene en términos generales.

Pero en el periodo actual han surgido órganos de prensa organizados de manera distinta que los anteriores. Ahora incluyen diversas opiniones, pretenden llegar a más lectores ofreciendo columnas de opinión heterogéneas, que reflejen varios puntos de vista. Esta nueva orientación de los medios escritos se complementa con su articulación con la prensa radial y televisiva.

Así, los dueños pueden ofrecer varias opiniones a la vez y la característica actual es que los medios más exitosos han perdido el aura de periodismo partisano que caracterizaba al periodismo anterior a la guerra interna. Por ello, nuestra primera hipótesis se sostiene parcialmente solo si se refiere a los periodistas como personas concretas, pero la realidad de los medios de comunicación se ha tornado mucho más compleja y, en ese sentido, el proceso de transformaciones es mucho más amplio.

Nuestra segunda hipótesis establecía que el trabajo posterior a la CVR sería una excelente oportunidad para las ONG de DDHH para difundir su labor, generar lazos orgánicos con entidades estatales como, por ejemplo, municipios. Pero, la realidad ha desmentido estos supuestos. Por el contrario, en el caso de Ayacucho, resalta cómo las ONG de DDHH concentran el resentimiento de aquellos periodistas que estuvieron durante la guerra con alguno de los contendientes armados. En otras palabras, tanto

los hombres de prensa vinculados al EP o a SL comparten su desdén por el trabajo de DDHH. Las ONG serían culpables de muchos males sociales, antes que un factor del desarrollo humano, como normalmente se autointerpretan. En este sentido, nuestra segunda hipótesis no se sostiene, porque las ONG han tenido reducidas oportunidades para influir en los medios de prensa y, a través de ellos, en la opinión pública.

Finalmente, nuestra tercera hipótesis establecía que la esfera política era la causa de las dificultades para la implementación de las recomendaciones de la CVR. Esta hipótesis ha caminado mucho mejor que las dos anteriores. En efecto, en numerosos casos hemos constatado cómo la indiferencia de los políticos con poder ha conspirado contra las recomendaciones de la CVR. Como veremos a continuación, la CVR nació en un momento excepcional del Estado peruano, al inicio del Gobierno de transición, inmediatamente a continuación de la caída de la autocracia fujimorista.

En ese momento el Estado adoptó algunas medidas singulares, que luego no han contado con favor oficial. Así, la CVR nació fruto de una iniciativa del Gobierno de Paniagua, pero en el resto de la década fue perdiendo crédito y ganando hostilidad por parte del aparato del Estado.

Este trabajo está organizado en dos secciones: la primera sobre Ayacucho y la segunda sobre Lima y, por lo tanto, sobre la prensa de alcance nacional. La primera sección revisa con mayor profundidad una de las dos preguntas que se plantearon para este ensayo, es decir, el análisis de los mensajes a propósito de la CVR; mientras que la segunda sección explora con mayor detenimiento la segunda pregunta de este trabajo. En este caso, se trata del proceso de implementación de las recomendaciones de la CVR, sus dificultades y situación actual. De este modo, a través de ambas secciones, aspiramos a revisar un contenido más amplio que las partes por separado.

Ese mismo ha sido el camino empleado para el abordaje cronológico. La primera sección se centra más en el proceso de la CVR en su conjunto, confiriendo suficiente atención al periodo previo y al trabajo de prensa durante la investigación y redacción del Informe de la CVR.

Por su parte, la segunda sección se concentra en el periodo posterior al Informe Final. De este manera, del mismo modo que con respecto a la cuestión temática, el orden cronológico ha sido abordado buscando que el ensayo final desarrolle un argumento más completo que cualquiera de sus pilares por separado.

AYACUCHO

1. ANTECEDENTES

En la ciudad de Huamanga, la experiencia periodística se inició durante los años de lucha por la emancipación. El primer periódico en la ciudad fue *La Aurora Austral*, una publicación de orientación realista. Todavía no había caído el Gobierno del virrey José de la Serna, asentado en Cusco y, en esa coyuntura, el Ayacucho oficial aún apostaba por la causa del rey de España.

De este modo, el periodismo regional nació en medio de una guerra que enfrentaba y dividía a la sociedad regional. En efecto, durante la gesta de la emancipación, en Ayacucho hubo tanto realistas como patriotas. Unos y otros realizaron grandes esfuerzos por su causa y condujeron una guerra cruenta y sanguinaria.

Las revanchas y ajustes de cuentas estuvieron a la orden del día; en esta época auroral no hubo política sino violencia. Ese sino proveniente de la cuna acompañaría a Ayacucho durante los años de la guerra interna, 1980-1992.

Al comenzar la república, aparecieron varios periódicos que promovían la postura de los caudillos militares que disputaban el poder político. Entre estos tenemos a *La Oliva de Ayacucho*, de clara filiación gamarrista; *El Victorioso*, que defendió a Santa Cruz; *Ayacucho Libre*, partidario de Vivanco; *El Filántropo*, que propugnó los propósitos del primer líder civil de la república, el iqueño Domingo Elías; otros periódicos ayacuchanos del siglo XIX fueron *La Opinión en Triunfo* y *El Restaurador*, ambos de filiación castillista.¹

Esta intensa producción periodística se mantuvo aun durante la aciaga Guerra del Pacífico, cuando se publicaron hasta trece periódicos, entre los que figuran *El Registro Oficial del Departamento*, *El Porvenir*, *El Periodismo* y *El Estandarte Civil*, *La Patria*, *La Unificación Nacional*, entre otros.²

En esta época era imprescindible disponer de una publicación para lograr posicionarse en el terreno político. La elite estaba asociada con la cultura letrada y el periódico era expresión de intereses políticos de grupo. Aún no existían partidos propiamente dichos y la política era ejercida por clubes de intereses que, por lo mismo,

1. Vila Souza, José, *Desarrollo del periodismo*.

2. Galdo Gutiérrez, Virgilio, *Ayacucho*.

registraban alta fragmentación y elevada volatilidad. Durante todo el siglo XIX, el periodismo fue esencialmente político, existió en función de alguna bandería y su suerte estaba íntimamente vinculada a la del caudillo sostenido por la publicación. A su vez, el periodismo era una actividad esencialmente urbana y su penetración en medios rurales era muy incipiente.

En la siguiente centuria, esta producción periodística se mantuvo, especialmente en la primera mitad del siglo XX, cuando la prensa local se convirtió en el espacio propicio para la publicación de los artículos y ensayos de intelectuales ayacuchanos como Manuel Jesús Pozo, Pío Max Medina o Lucio Alvizuri, dedicados a explorar la historia y el folklore de la región y enunciar proyectos desarrollistas, promoviendo intensamente la identidad regional.

En la primera parte del siglo XX, el fenómeno más notable del periodismo regional fue esta diversificación, que dejó atrás un periodismo exclusivamente político, para asumir también una preocupación cultural. La idea que animó al periodismo ayacuchano de la primera parte del siglo XX fue que, a través de la identidad y el sentido de pertenencia regional, se fomentaría el progreso local.

La emblemática revista *Huamanga* fue el órgano de expresión del Centro Cultural Ayacucho. Esta revista cultural y política alcanzó un buen nivel y fue publicada desde 1934 y por más de 20 años. Otro de los más importantes periódicos ayacuchanos durante el siglo XX fue *Paladín*, medio de prensa que se mantuvo vigente por más de 30 años, desde mediados de siglo hasta los años ochenta, bajo la dirección del periodista local Próspero Núñez.

Durante la década de 1980 ocurrió una fuerte retracción en la producción de periódicos locales, debido al estallido de la violencia política y la difícil situación económica por la que atravesaba el país. Es decir, prácticamente no hubo prensa escrita regional.

Pero, no desapareció la labor periodística; al contrario, se concentró en el servicio de corresponsalía para publicaciones de Lima y del extranjero. Asimismo, el periodismo regional tuvo alta participación en las radioemisoras locales, donde se informaban y denunciaban los peores efectos de la guerra interna en Ayacucho. Durante la guerra interna, la radio ocupó un puesto crucial en la comunicación ciudadana, incluso superando su normalmente elevado rol en medios provincianos y rurales.

Durante estos años fatídicos, los periodistas locales estuvieron sometidos a un fuerte estrés. Las fuerzas combatientes los obligaban a posicionarse y, como consecuencia, se volvían blanco fácil de la parte contraria. La profesión de periodista los llevó a vivir en constante peligro. Varios fueron asesinados y la suya se convirtió en una profesión de alto riesgo. Atrapados entre dos fuegos, los periodistas ayacuchanos sufrieron junto con su pueblo más de una década de violencia desbocada.³

Cuando estalló la guerra interna, ya existían en Ayacucho instituciones locales que respondían al proceso de organización de los periodistas a escala nacional. Estas entidades se quebraron y resquebrajaron durante la violencia, y no pudieron ofrecer un manto institucional que protegiera la actividad periodística.

Otros factores negativos para el periodismo regional eran la elevada movilidad laboral y los bajos ingresos. La actividad en los medios de prensa locales ha significado

3. Un análisis de las tensiones sufridas por la prensa a causa de la subversión se puede encontrar en el libro de Carlos Oviedo, *Prensa y subversión*.

honorarios precarios como signo distintivo de la vida cotidiana de muchos periodistas. Asimismo, estos profesionales estaban cambiando de medio de prensa con regularidad; como consecuencia, la rotación era elevada.

En el Ayacucho de los años de guerra, la radio ofrecía mayores posibilidades de conseguir publicidad que los medios escritos. Durante este periodo, la radio había consolidado su liderazgo sobre la virtualmente extinta prensa escrita y aún no había aparecido la TV local. En este sentido, la radio fue el gran campo de batalla por la propaganda e información durante la guerra interna.⁴

2. LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN DURANTE LOS AÑOS NOVENTA

Recién en la década de 1990 volvió a aparecer la prensa escrita, a través de diarios como *La Calle* o *La voz de Huamanga*, o de revistas como *El Quincenal*, *Wari* o *Verdad*, muchas de las cuales aún siguen circulando el día de hoy. Tuvo que terminar la guerra interna para que publicar periódicos locales en Ayacucho volviera a tener sentido y reaparecieran los medios impresos locales.

El diario regional *La Calle* es actualmente el más influyente en Huamanga. Empezó a circular en 1993 y, en los tiempos actuales, constituye un tipo de «prensa dominante», ya que ha logrado una posición de liderazgo gracias al fomento de mecanismos de representación en el espacio público.

En efecto, *La Calle* constituye un privilegiado modulador de la opinión pública, puesto que sus noticias y opiniones promueven la consolidación de un discurso dominante dentro de Huamanga. El mensaje que promueve el periódico pretende dar sentido a la realidad cotidiana. A la vez, consiste en una plataforma a la cual recurren los líderes políticos y sociales si quieren comunicarse con la ciudadanía.⁵

Este periódico fue fundado en 1993. Está conformado por seis páginas que contienen noticias políticas, culturales y deportivas. A su vez, se registra un balance entre alguna información nacional y abundante local y regional. En la página 2 aparece la nota editorial que, en la mayoría de los casos, es elaborada por el periodista Necías Taquiri Yanqui (tal como figura en la viñeta técnica). Esta nota viene acompañada por una columna, escrita por uno de los colaboradores, quienes suelen tener posiciones distintas de la del editorialista principal.

En ese sentido, *La Calle* es muy hábil presentando puntos de vista heterogéneos. Recoge diversos intereses y es la casa periodística de varios colaboradores que no necesariamente comparten puntos de vista. De este modo, este periódico ofrece al lector un panorama variado que le permite formarse una opinión propia.

En el tiempo de la CVR, a la vez que la criticaba muy seriamente en sus editoriales, *La Calle* publicaba separatas que contenían secciones del Informe. Así, criticaba, pero difundía. Gracias al fomento consciente de una heterogeneidad controlada, *La Calle* ha consolidado su liderazgo sobre la prensa diaria local.

La Calle, juntamente con Radio Estación Wari, forman parte de la empresa de comunicación de los esposos Walter Muñoz Inga y Esther Valenzuela Zorrilla. En esta

4. Hjelde, Aase, *Periodismo bajo terror*. Este libro de una investigadora noruega reconstruye minuciosamente la vida cotidiana y los retos del periodismo regional durante la guerra interna.

5. Peralta, Víctor, *Sendero Luminoso*, pp. 25-27.

empresa, Muñoz Inga se desenvuelve como director del diario, mientras que Valenzuela Zorrilla se desempeña como directora de la estación radial y del programa periodístico «Estación Noticiosa».

Dicha emisora fue creada en 1985 y, desde entonces, viene funcionando sin interrupción alguna en el escenario local, ofreciendo una variada programación que incluye tres espacios informativos, además de varios programas institucionales y numerosos programas musicales.

Precisamente en los espacios institucionales, en la publicidad encargada por las instituciones públicas de la ciudad de Ayacucho y en la suscripción de estas al diario *La Calle* reside el éxito comercial de la empresa de Muñoz-Valenzuela. Radio Estación Wari constituye un medio adecuado para que las oficinas públicas de Ayacucho coloquen su avisaje, mientras que el diario *La Calle* cuenta con la suscripción de la mayoría de instituciones estatales de la ciudad. Por ello, Radio Wari y el diario *La Calle* hoy en día son los únicos medios locales que pagan regularmente un salario mensual a sus periodistas.⁶

En los archivos y bibliotecas de la ciudad de Ayacucho se pueden hallar con facilidad ejemplares de *La Calle*, mas no de los otros medios que circulan en la ciudad.⁷ Este diario, además, es citado constantemente por la opinión pública y considerado como un buen referente noticioso. No es, sin embargo, el único medio de prensa significativo.⁸

Otra empresa radial y de prensa importante en Ayacucho la conforman Radio La Voz de Huamanga y el diario *La Voz de Huamanga*. La emisora fue fundada en 1963 por el periodista huancavelicano Fernando Cruz Mendoza y es una de las emisoras más antiguas de la sierra sur peruana, además de que forma parte de la red de comunicaciones «Emisoras Cruz del Perú», controlada por la familia Cruz, que en sus mejores años llegó a tener hasta 14 emisoras del interior del país.

No obstante, desde 1992 y a raíz de un atentado perpetrado por Sendero Luminoso, la emisora se encuentra en una difícil situación económica.⁹ Al igual que el anterior medio de comunicación, esta emisora cuenta también con un diario de circulación local: el diario *La Voz de Huamanga*, bajo la administración y dirección de Aguida Valverde González.

Además, la ciudad de Ayacucho cuenta con otros medios de comunicación escritos, radiales y televisivos. Entre los primeros destacan el diario local *Jornada*, que se publica desde 2004 y, en la actualidad, está bajo la dirección del joven periodista Jaime Quispe Olano. Otro diario regional importante es *Correo*, que pertenece a la Empresa Periodística Nacional S. A. (EPENSA), que produce y distribuye los diarios *Correo*, *Ajá*,

6. Comunicación personal del periodista Urbano Muñoz, profesor de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga del 8 de enero de 2010.

7. Es de gran utilidad el libro del periodista ayacuchano Mario Cueto Cárdenas, *Ayacucho: prensa y violencia*, puesto que presenta un «resumen cronológico» de las notas periodísticas aparecidas en los diarios locales sobre las labores de la CVR.

8. Durante los años 2001, 2002 y 2003 también circulaban por Ayacucho los siguientes diarios: *La Voz de Huamanga* y la edición regional de *Correo*.

9. Precisamente, la periodista Ana María Cruz, hija de Fernando Cruz, fue amenazada por SL en varias oportunidades. Ella, para salvar su vida, tuvo que asilarse primero en Ecuador y luego en Canadá. *Caretas* 1470, junio de 1997.

El Bocón y Ojo en numerosas ciudades de provincia. *Correo* tiene una edición regional ayacuchana desde el año 2002 y, en la actualidad, su director es Héctor Mayhuire.

Entre los medios de comunicación radial figura Radio Atlantis, perteneciente a la Empresa Latinoamericana de Radiodifusión, que también administra Televisión Atlantis en la misma ciudad de Ayacucho. Esta emisora radial cuenta con uno de los programas periodísticos más sintonizados a nivel local, conducido por los periodistas Mario Cueto Cárdenas y Mario César Zenitagoya. Puede decirse sin error que la elite política local escucha regularmente este programa radial. Y, entre los medios televisivos, destaca el Canal 33, del periodista Magno Sosa Rojas.

3. CONSTITUCIÓN E INTEGRANTES DE LA CVR

Luego de la caída del régimen autoritario de Alberto Fujimori, el Gobierno Transitorio de Valentín Paniagua decidió crear la Comisión de la Verdad el 4 de junio de 2001 mediante Decreto Supremo N° 065-2001-PCM, encomendándole las funciones de «esclarecer el proceso, los hechos y responsabilidades de la violencia terrorista y de la violación a los derechos humanos producidos desde mayo de 1980 hasta noviembre de 2000, imputables tanto a las organizaciones terroristas como a los agentes del Estado, así como proponer iniciativas destinadas a afirmar la paz y la concordia entre los peruanos».

Poco después, el Gobierno nominó a los siete comisionados encargados de cumplir con el encargo encomendado por el Decreto Supremo. Entre los designados estaban el Dr. Salomón Lerner, entonces Rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú y designado como Presidente de la Comisión; la socióloga Sofía Macher, ex Secretaria Ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos; la abogada Beatriz Alva Hart, ex congresista de la República; el antropólogo Carlos Iván Degregori; el ingeniero Carlos Tapia; el sacerdote Gastón Garatea; y el abogado Enrique Bernales Ballesteros, Director Ejecutivo de la Comisión Andina de Juristas.

El 4 de setiembre del mismo año, esta Comisión fue ratificada y complementada por el nuevo Gobierno presidido por Alejandro Toledo, quien había asumido funciones el 28 de julio del mismo año, mediante el Decreto Supremo N° 101-2001-PCM, que modificó su nombre por el de Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y amplió la cantidad de comisionados de 7 a 12.

Entre los nuevos designados figuraban el ingeniero Alberto Morote Sánchez, ex Rector de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga y ex Presidente del Consejo Transitorio de Administración Regional de Ayacucho durante el Gobierno de Valentín Paniagua; y el sacerdote salesiano José Antúnez de Mayolo, ex Administrador Apostólico de Ayacucho, entre otros.¹⁰

La iniciativa para la creación de la Comisión de la Verdad partió de la elite política limeña, específicamente del grupo que asesoraba al presidente Paniagua. No fue una demanda originada en Ayacucho, no había fuerzas suficientes para ello, debido a la fragmentación de las instituciones locales, preocupadas fundamentalmente por reivindicaciones puntuales.

10. Los otros nuevos comisionados fueron el Teniente General FAP (r) Luis Arias Grazziani, el sociólogo Rolando Ames Cobián y el pastor evangélico Humberto Lay Sun. Fue designado observador el entonces Obispo de Chimbote y Presidente de la Conferencia Episcopal Peruana Luis Bambarén Gastelumendi.

La única entidad social regional con pretensión de representación general era el Frente de Defensa, pero su capacidad para articular intereses era limitada. Reunía a los dirigentes sociales, pero no a todos y, sobre todo, con irregular participación de bases. Era una coalición significativa y había cumplido un papel destacado en las luchas contra la reelección fujimorista, pero no tenía capacidad para vencer las limitaciones del ejercicio político local.

Un factor imperante en la mentalidad del Ayacucho previo a la CVR era la cultura del miedo, heredada del periodo de violencia y que llevaba a callar, a no mirar demasiado, a concentrarse en sus propios asuntos si uno quería salvar la vida. De ese modo, la cultura del miedo se tradujo en una actitud profundamente apolítica e incluso antipolítica, fuertemente estimulada por el poder del Estado durante los años de Fujimori.

La interpretación del antropólogo Enver Quinteros sostiene que la interacción entre la cultura del miedo y la falta de amplia representación social provocó entre los ayacuchanos un sentimiento fuerte de victimización. La consecuencia de este sentirse víctimas fue la debilidad para generar demandas frente al Estado y la pasividad política en general, expresada particularmente en la nula preocupación por investigar los abusos cometidos durante la guerra interna.¹¹

Al conocerse en Ayacucho la decisión del Gobierno de crear una Comisión de la Verdad, se inició un «estallido de memorias». Durante este primer instante, toda la sociedad ayacuchana hablaba del asunto. Los medios de comunicación no estuvieron ausentes del debate sino que lo alentaron. Si bien aceptaron —como la mayoría de los ayacuchanos— la formación de una Comisión encargada de esclarecer el proceso de violencia, los hechos ocurridos y las responsabilidades correspondientes, cuestionaron, en cambio, la idoneidad de sus integrantes.

Así, en uno de sus primeros editoriales referidos al tema y publicado un mes antes de la creación de la Comisión, el diario *La Calle* demandaba que los integrantes de la futura Comisión debían estar exentos de compromiso ideológico y no debían haber participado en las Organizaciones No Gubernamentales, ONG.¹² Por esos días se decía que algunos integrantes de ONG locales de Derechos Humanos serían nombrados integrantes de la Comisión como representantes de Ayacucho.

Días después, al informarse oficialmente la creación de la Comisión, el mismo diario aceptaba la misión encomendada a esta entidad, pero llamaba la atención sobre sus futuros integrantes, que aún no habían sido nominados:

Lo que está en juego y a esto apunta la Comisión creada, es que conociendo todo lo limpio y sucio de esa guerra, previa justicia y reconciliación de partes, forjemos la paz. Pero si los que medraron con la guerra y se volvieron ricos con ella, pasan ahora a integrar la Comisión, ¿creen ustedes que vamos a lograr el objetivo? ¿Dónde quedan las partes enfrentadas que deben disculparse entre sí, pedirse perdón, reconciliarse, etc.?¹³

La Calle usaba la frase «los que medraron la guerra y se volvieron ricos» para referirse a los integrantes de las ONG de DDHH. Resulta sorprendente esa fuerte animosidad contra los defensores de los DDHH. Resulta que, durante la guerra interna,

11. Quinteros, Enver, «Ayacucho», p. 260.

12. *La Calle*, 13 de abril de 2001, p. 2.

13. *La Calle*, 11 de junio de 2001, p. 2.

parte de la sociedad ayacuchana había visto a los integrantes de ONG como profesionales exitosos que laboraban en buenas condiciones, ganando un sueldo por su labor y relativamente protegidos por el manto de las fundaciones y organismos internacionales de cooperación. Contra las ONG se había desatado una fuerte envidia. Según algunos ayacuchanos, «mientras el espinazo de la sociedad ayacuchana era quebrado en dos por la guerra, las ONG vivían espléndidamente gracias a ella».¹⁴

Efectivamente, en el mismo periodo en que era creada la Comisión, las instituciones y los gremios de la ciudad discutían su conformación y proponían los nombres de dos ayacuchanos para liderar el grupo de trabajo, conjuntamente con los otros cinco designados por el Gobierno. El citado medio decía, en ese entonces, que debería prestarse «sumarísima atención a las personas que [...] van a integrar [la Comisión] y entre ellas, a la persona que la va a dirigir».¹⁵

Retrocediendo un poco en la historia, resulta que inmediatamente antes de la conformación de la Comisión de la Verdad, el Frente de Defensa de Ayacucho había cobrado protagonismo en la lucha contra Fujimori. Esta entidad estaba integrada por la base local del Sindicato Único de Trabajadores de la Educación en el Perú-SUTEP, la Federación Agraria Departamental de Ayacucho-FADA, la Federación de Barrios y los sindicatos de trabajadores del Hospital, de la Municipalidad, del Mercado y Construcción Civil.

En todo el periodo final de Fujimori, el Frente fue uno de los protagonistas de la política local. Tuvo la capacidad para organizar mítines, tomar locales estatales, censurar prefectos, nombrar a los gerentes regionales de Educación, Trabajo y Agricultura. Así, tuvo la pretensión de hacer lo mismo con la Comisión de la Verdad. Sin embargo, este punto era políticamente trascendental y el Gobierno nacional no le hizo caso al Frente ayacuchano.

Para este resultado colaboraron diversos yerros políticos del Frente. Inicialmente propusieron una lista integrada por su mismo presidente, Rigoberto García Ortega; también la integraban el ex alcalde y ex prefecto regional durante el Gobierno de Fujimori, Jorge García Prado; el sociólogo y profesor de la Universidad de Huamanga, José Carlos Palomino; y el periodista y candidato al Congreso de la República por el Frente Independiente Moralizador-FIM, Magno Sosa Rojas.

Pero, esta lista fue inmediatamente desaprobada por la sociedad ayacuchana. Nadie estaba de acuerdo, puesto que —como se señaló en los medios— no era resultado de un consenso, sino simplemente un acuerdo al interior de la directiva del Frente de Defensa. Era una lista trabajada por un pequeño grupo, pero que contaba con supuesto apoyo de bases. El Frente comenzaba a distanciarse de su propia sociedad y de este modo contribuía poderosamente a que el Gobierno nacional ignorara sus planteamientos.¹⁶

Ante este cuestionamiento, el Frente convocó a una asamblea y confeccionó una nueva lista de siete candidatos, en esta ocasión integrada por el destacado arqueólogo Luis Guillermo Lumbreras; el antropólogo José Coronel, estudioso de la violencia

14. Entrevista a Fermín Rivera, antropólogo, profesor de la Universidad San Cristóbal de Huamanga y columnista de medios de comunicación. Ayacucho, 5 de enero de 2010.

15. *La Calle*, 15 de junio de 2001, p. 2.

16. Entrevista a José Coronel, ex responsable de la sede regional de la CVR en Ayacucho, 7 de enero de 2010.

política, ex docente de la UNSCH y en ese entonces encargado de la oficina regional del Programa de Apoyo al Redoblamiento-PAR; el abogado Juan Alberto Ochoa Sotomayor; el abogado Mario Cavalcanti Gamboa, entonces asesor legal del Frente y ex diputado por Izquierda Unida; el estudiante universitario Walter Quispe, integrante de la agrupación Jóvenes por la Verdad; la señora Teodomira de la Cruz, presidenta de la Federación de Clubes de Madres de la provincia de Huamanga; y, nuevamente, el presidente del Frente de Defensa, Rigoberto García. De estos candidatos fueron elegidos finalmente los cuatro últimos: Cavalcanti, Quispe, De la Cruz y García.¹⁷

Sin embargo, ninguno de los cuatro elegidos por esta asamblea llegó a integrar la Comisión de la Verdad. Mientras los ayacuchanos debatían públicamente e impugnaban en los medios de comunicación a los candidatos presentados por el Frente de Defensa, se fue pasando el tiempo y la propuesta llegó tarde. Para ese entonces, el presidente Paniagua ya había formado la Comisión con los siete comisionados mencionados anteriormente, sin incluir ninguno propuesto por el Frente ayacuchano.

Al publicarse la conformación final de la Comisión, el Frente de Defensa y los medios de comunicación locales elevaron una nueva propuesta, en la que solamente figuraba el nombre de Luis Guillermo Lumbreras, el mencionado arqueólogo de amplia reputación nacional e internacional, quien había sido finalmente tachado en la famosa asamblea, habiéndose alegado que no había vivido en Ayacucho durante el periodo de violencia.¹⁸

Pero, esta reacción fue tardía y era incongruente con la discusión sostenida en la asamblea del Frente. Ya la Comisión estaba formada por el Gobierno central. Las indecisiones y pleitos internos ayacuchanos facilitaron la iniciativa tomada en Lima de ignorar las propuestas de una sociedad local que no se entendía consigo misma.

De este modo, la actuación de la sociedad ayacuchana ante el tema de la Comisión de la Verdad se caracterizó por la elevada volatilidad política. Una entidad asumió la representación regional sin que la sociedad se lo hubiera concedido ni aceptado plenamente. Esa entidad, el Frente de Defensa, elaboró una lista estrictamente entre sus allegados; fue duramente cuestionada por la misma opinión pública ayacuchana y aprobó una segunda lista en asamblea.

Cuando se hizo evidente que el Gobierno central también iba a prescindir de esa segunda lista, entonces el Frente acordó solamente un nombre, pero era alguien a quien anteriormente ellos mismos habían vetado. Así, el Gobierno central ignoró las propuestas del Frente ayacuchano. A oídos limeños, su actuación sonaba incoherente.

De acuerdo con el destacado periodista local Mario Cueto Cárdenas, el fondo del problema de la composición de la Comisión no era el origen regional de los comisionados. En su opinión, el punto era que parte de ellos tenían una interpretación previa y bien fundamentada de la guerra interna. No eran neutrales.

Esta previa toma de posición hacía que el trabajo de la Comisión fuera una simple confirmación de ideas anteriormente establecidas. Según Mario Cueto piensa hoy día, la realidad confirmó sus temores. El Informe final es la puesta al día de las antiguas posiciones de algunos comisionados que habían estado en Ayacucho durante la década del 1970.

De acuerdo con el parecer de Cueto, los comisionados Carlos Tapia y Carlos Iván Degregori habían debatido contra Sendero cuando eran jóvenes profesores de la

17. Quinteros, Enver, «Ayacucho», p. 261, n. 13.

18. Quinteros, Enver, «Ayacucho», p. 262.

Universidad de San Cristóbal, luego lo habían estudiado como analistas trabajando para las ONG y, finalmente, habían confirmado sus ideas como integrantes de la CVR. Le parece que no hicieron un buen trabajo porque no eran neutrales y juzga que esta es la condición esencial para una Comisión de la Verdad.¹⁹

Esta interpretación es considerada exagerada por otros periodistas ayacuchanos. Por ejemplo, Juan Camborda considera que la investigación no fue sesgada. Por el contrario, que fue un proceso muy abierto y se caracterizó por la riqueza de su información; se recogieron miles de testimonios, produciendo un inmenso material cuyo contorno estaba delimitado por el mandato de la Comisión. La abundancia de información permitió una interpretación muy fresca y original en la que participaron diversas voces.

Según la opinión de Camborda, ni por asomo habría existido una reiteración de polémicas pasadas. Asimismo, recuerda que los comisionados formaban un grupo muy solvente y con dotes profesionales; para empezar, por el doctor Salomón Lerner, a quien resalta como importante filósofo y rector de una universidad tan importante para el país como la PUCP. En este parecer, la interpretación de Lerner fue muy importante para la elaboración del argumento central de la CVR. En este sentido, opina que si bien Tapia y Degregori cumplieron su papel, no fueron lo únicos integrantes de la CVR que tenían opinión propia y un fundamentado punto de vista sobre los hechos.²⁰

4. REACCIÓN AYACUCHANA

A partir de entonces, la mayor parte de medios de comunicación de Ayacucho reaccionaron en contra de la Comisión de la Verdad, calificando al grueso de sus miembros como «limeños», vinculados a ONG «que lucran con el dolor del pueblo» o «pseudo intelectuales». Como vemos, en esta postura no estuvieron todos los medios de comunicación ni tampoco de manera absoluta; siempre hubo un grupo de periodistas que apoyaron de alguna manera a la Comisión y matizaron el debate sobre ella.

Pero, era evidente que la opinión mayoritaria en los medios era contra la Comisión. Por ejemplo, poco después de conocerse el nombre de los comisionados, el diario *La Calle* publicó un fuerte editorial atacando a la Comisión, escrito por el periodista Necías Taquiri Yanqui, titulado «Otra comisión pituca», en el que se preguntaba sobre el profesionalismo y credibilidad de los integrantes de la Comisión de la Verdad y exigía la reconsideración de su conformación. Decía, además, lo siguiente:

[...] con excepción de uno o dos de sus integrantes, a quienes conocemos muy poco, de los otros podemos afirmar lo contrario; los conocemos demasiado. Así, por esta razón, podemos recordar que, mientras los peruanos del Ande nos debatíamos en medio del conflicto armado, algunos de los actuales miembros de la Comisión se entretenían escribiendo en sus perfumadas oficinas artículos analíticos sobre lo que ocurría en nuestras tierras, en base, además, a informaciones de segunda mano que recibían de sus Filipillos propinados, tergiversando la realidad en no pocas ocasiones. Y del odio destilado por alguno de ellos contra uno y otro frente en conflicto, también lo sabemos, porque recordamos sus clases, sus incendiarias polémicas en aulas y patios cristobalinos

19. Entrevista a Mario Cueto. Ayacucho, 6 de enero de 2010.

20. Entrevista a Juan Camborda. Ayacucho, 8 de enero de 2010.

y hasta los conflictos familiares que tenían con algunos de los protagonistas de la guerra interna.²¹

Sin lugar a dudas, el editorial aludía a los comisionados Degregori y Tapia, puesto que los dos habían escrito y publicados artículos y ensayos sobre la violencia política en el Instituto de Estudios Peruanos, uno de los centros de investigación más importantes de la ciudad de Lima. Ambos, además, habían sido en los años setenta militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionaria-MIR y profesores de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, donde entablaron una fuerte polémica política e ideológica con el grupo liderado por Abimael Guzmán Reynoso.²²

Por dudar de la neutralidad y credibilidad de estos comisionados, *La Calle* y los otros medios de comunicación de Ayacucho empezaron a designar a la Comisión de la Verdad como «Comisión de la mentira», rótulo que algunos periodistas ayacuchanos utilizan hasta el día de hoy cuando se recuerda la labor de este grupo de trabajo.²³

Se decía que Degregori y Tapia iban a utilizar su posición en la Comisión para reafirmar sus previas posiciones ideológicas, elaboradas en la polémica contra el senderismo en los años setenta. Es decir, que el viejo debate entre izquierdistas volvía a abrirse, solo que en esta ocasión Tapia y Degregori aparecían como representantes de una iniciativa estatal, la misma Comisión de la Verdad, mientras que sus antiguos polemistas, los líderes senderistas, estaban derrotados y confinados en prisión. De acuerdo con este parecer, la labor de la Comisión estuvo teñida por un diálogo desigual, vertical, deshaciendo la antigua horizontalidad que había primado en los debates de la década de 1970.²⁴

Los cuestionamientos se hicieron más fuertes cuando el presidente Toledo anunció el incremento del número de comisionados, en setiembre de 2001. En esta ocasión, los medios de comunicación demandaron nuevamente la participación de los ayacuchanos en la Comisión de la Verdad. Era una nueva ocasión para pugnar por algún representante que dejara contenta a la sociedad civil ayacuchana. Sin embargo, el resultado sería una nueva frustración por causas semejantes a las de la oportunidad anterior.

El diario *La Calle*, por ejemplo, se preguntaba lo siguiente:

[...] ¿Por qué los honorables comisionados, ahora que el presidente Toledo ha anunciado que crecerá hasta doce de sus integrantes, no proponen algunos nombres de los conformantes de la ANFASEP? ¿Saben por qué? ¡Porque nadie como el ANFASEP conoce la realidad de los muertos, secuestrados y desaparecidos del Perú, y nadie como ellos siente en carne propia el dolor de haber perdido a un padre, una madre, un hijo, un hermano a consecuencia de la guerra interna!²⁵

21. *La Calle*, 9 de julio de 2001, p. 2.

22. Degregori, Carlos Iván, *Ayacucho*; Manrique, Nelson, *El tiempo del miedo*.

23. *La Calle*, 10 de julio de 2001.

24. Fermín Rivera.

25. *La Calle*, 9 de agosto de 2001, p. 2. Algunos intelectuales limeños compartían la idea de la necesaria participación de las víctimas de la violencia en la Comisión. Víctor Vich señaló que la CVR tenían un problema capital «que consiste que consiste en que en su composición no encontramos un representante directo de las víctimas, vale decir del lado más golpeado de la brutal violencia que ocurrió en el país durante las dos últimas décadas. Justamente por ello, la responsabilidad de

El periódico en referencia llegó incluso a construir un discurso de otredad invertida, para cuestionar la participación de los comisionados capitalinos en la CVR: «¿Cómo van a entender los hermanos de Aqomarca, Lucanamarca, Erusco, Pallqa, Manallasaq o Incaraqay, si no podrán interpretar desde su pedestal académico de honras y medallas occidentales el real espíritu de los testimonios que deben recogerse de primera mano, además de con el cerebro, también con el corazón?».²⁶

Esta demanda poco a poco se fue transformando en un discurso regionalista con un fuerte componente étnico, a través del cual se pretendieron legitimar las demandas en torno a la Comisión de la Verdad, mezcladas con la permanente exigencia de que en cualquier grupo de trabajo o institución creada para tratar los problemas de Ayacucho debían participar los profesionales ayacuchanos y no los provenientes de la capital. La provincia contra la capital y, en esta contradicción, a ojos de la mayoría de los medios ayacuchanos, la Comisión de la Verdad acabó situada del lado del centro nacional, lejos del sentir del interior.

La Calle aludió directamente este reclamo cuando, en su editorial del 16 de octubre, dijo que «han venido desde Lima, los miembros de la Comisión de la Verdad, o mejor dicho, sus implementadores técnicos a nuestra tierra. Gran favor que nos hace, cuando como si fueran afortunados turistas escogen los más lujosos hoteles para ofrecer conferencias de prensa inclusive».²⁷

Este discurso, además, combinaba enunciados de alteridad al establecer dicotomías entre los comisionados (considerados como occidentales y capitalinos) y las víctimas de la violencia (representados como los «otros» y los «excluidos» del grupo de trabajo). En esencia, se sostenía que los asuntos de la guerra correspondían a una problemática relativa a los medios rurales andinos, los cuales solo podían ser comprendidos por personas provenientes del mismo medio cultural. Un editorial del diario *La Calle* decía lo siguiente:

Pensábamos (ahora ya no, lo confesamos) que con la creación de la Comisión de la Verdad por el Gobierno transitorio de Valentín Paniagua, los peruanos íbamos a hallar el esperado camino de la pacificación, luego de una larga etapa de hechos, sentimientos y resentimientos encontrados, que todos conocemos. Si el objetivo es la conciliación, ¿por qué se excluye al sector mayoritario del pueblo, víctima de la guerra interna habida? ¿Cómo se logra un abrazo si el otro no está o está considerado solo como elemento secundario desde la Comisión? ¿Solo un abrazo protocolar o a distancia?²⁸

Cabe precisar que hubo voces más conciliadoras al respecto, pero fueron minoritarias. Las opiniones que estamos mostrando fueron las de mayor y notoria presencia en la prensa, que influyeron de forma poderosa en la generación de opinión pública. Pero, de todos modos, es preciso consignar que también hubo expresiones más inclusivas, que estaban dispuestas a aceptar sin inconvenientes que participaran en la CVR personas provenientes de medios académicos universitarios.

esta Comisión de la Verdad es mucho mayor y más exigente. Por ello también, todos debemos participar activamente». Vich, Víctor, «La literatura», p. 69.

26. *La Calle*, 18 de julio de 2001, p. 2.

27. *La Calle*, 16 de octubre de 2001, p. 2.

28. *La Calle*, 7 de septiembre de 2001, p. 2.

Una de las plumas conciliadoras fue la del periodista y antropólogo Carlos Condori Castillo, quien desde el inicio del debate se mostró a favor de la Comisión de la Verdad, pero sin dejar de cuestionar la conformación del grupo de trabajo. Los defensores de la Comisión en el periodismo ayacuchano no eran incondicionales, sino que elaboraron un discurso de apoyo crítico. Escuchemos a Condori:

Tal vez hubiéramos deseado una Comisión con otros rostros, con presencia de algunos de los nuestros, representantes de organizaciones de base, etc. Pero, ¿esto desdice la calidad y la trascendencia de esta Comisión de la Verdad? Definitivamente no [...] Dejemos de lado mezquindades. Seamos, sobre todo entre los periodistas, menos barrenderos, dedicados únicamente a hurgar y recoger basura para también mostrar realidades, virtudes, capacidades, voluntades, sobre todo en un pueblo que sí tuvo la capacidad de sobrevivir a tanta desgracia.²⁹

5. LA SEDE REGIONAL DE LA CVR EN AYACUCHO

A fines del año 2001, cuando en la prensa ayacuchana se seguía discutiendo sobre los integrantes de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, esta institución anunció la creación de la sede regional de Huamanga y de la sede zonal de Andahuaylas como órganos descentralizados encargados de cumplir con la misión encomendada a la CVR en los departamentos de Ayacucho y Apurímac.³⁰

Como responsable de la Sede Regional de Ayacucho fue nombrado el antropólogo José Coronel Aguirre, ex docente de la Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga, a quien ya hemos presentado como investigador de la violencia política y jefe de la oficina del PAR en Ayacucho durante el Gobierno de Paniagua. Coronel había sido voceado como candidato a comisionado por el Frente Regional pero, finalmente, el mismo Frente lo había excluido.³¹

Una vez asumido el cargo, Coronel formó un grupo de trabajo mixto, integrado por abogados, periodistas y científicos sociales, tanto ayacuchanos como provenientes del resto del país y un extranjero. Este equipo se encargaría de cumplir con las tareas prioritarias de la CVR en la región, como el recojo de testimonios y la construcción de una base de datos, la elaboración de la historia regional de la violencia, la exhumación de las fosas comunes y la realización de audiencias públicas.³²

Así, en la primera mitad del año 2002 se realizaron en Ayacucho dos actos simbólicos significativos, que fueron ampliamente cubiertos por la prensa local y nacional. El primero de ellos fue la exhumación de una fosa común ubicada en la comunidad de

29. *La Calle*, 16 de noviembre de 2001, p. 2.

30. El 13 de noviembre de 2001, el Secretario Ejecutivo de la CVR Javier Ciurlizza anunció en una conferencia de prensa realizada en Ayacucho la creación de una sede regional ubicada en esta ciudad y de una subsede ubicada en el valle del río Apurímac. Esta última no llegó a funcionar (*La Calle*, 14 de noviembre de 2001).

31. José Coronel.

32. Entre los funcionarios de la CVR en la sede regional de Ayacucho figuran el antropólogo alemán Ludwig Huber, el historiador limeño Iván Caro, el historiador ayacuchano Ponciano del Pino y el periodista huamanguino Juan Camborda. Era un equipo mixto con bastantes pergaminos académicos y profesionales.

Chuschi, provincia de Cangallo, a fines de enero de 2002, que concluyó con la identificación de ocho comuneros asesinados presumiblemente por una patrulla militar en mayo de 1983.

En segundo lugar, en los primeros días de abril de dicho año se realizaron las primeras audiencias públicas en las ciudades de Ayacucho y Huanta, a través de las cuales algunas de las numerosas víctimas de la violencia manifestaron en público sus testimonios «para enriquecer la investigación [de la CVR], ampliar el espacio público y la agenda nacional, y crear oportunidades de sanación».³³

Entre los casos que se expusieron públicamente en la Audiencia de la ciudad de Ayacucho figuran los siguientes: la ejecución extrajudicial de los pobladores de Soccus (en 1983); la desaparición de Arquímedes Ascarza, hijo de la señora Angélica Mendoza, presidenta de ANFASEP (1983); la ejecución extrajudicial de los pobladores de Accomarca (1985); el asesinato del sacerdote Víctor Acuña Cárdenas (1987); y los asesinatos del profesor universitario Ciro Aramburú Villanueva (1990), del alcalde de Huamanga Fermín Azparrent Taipe (1989) y del funcionario aprista Marcial Capelletti Cisneros (1989).

La creación de la sede regional de la CVR y la realización de estas primeras actividades reimpulsó el debate en la prensa en torno a las funciones y composición de este grupo de trabajo. La crítica mediática contenía los anteriores discursos localistas y de etnicidad, sumados, en esta oportunidad, a un enunciado dominante, que adquirió un marcado corte social e institucional.

Así, los responsables de la sede regional fueron representados por el grueso del periodismo regional como intelectuales dependientes de los intereses nada altruistas de las ONG, que durante todo el periodo de guerra «lucraron» con el tema de la violencia política. El editorial del diario *La Calle*, escrito por el mencionado periodista Taquiri Yanqui, señalaba al respecto lo siguiente:

Desde que terminó la guerra interna, surgieron personas que dedicaron todo su tiempo y toda su voluntad a la constitución, dirección y desarrollo de los organismos no gubernamentales, cuyos objetivos más generales apuntaban a garantizar los derechos humanos, a aliviar los males generados por el conflicto y a encaminar al pueblo ayacuchano hacia su desarrollo. Sus resultados, sin embargo, están marcados por el fracaso. El tejido social dañado no se ha curado e, incluso, podríamos decir que está peor que antes del conflicto [...] La Comisión de la Verdad, afirmamos, si fracasa será por culpa exclusiva de la Comisión y de nadie más. Ya que en los hechos o en líneas generales, esta Comisión cuenta con el apoyo de todo el mundo, muy por encima de las críticas que hayan podido merecer algunos de sus integrantes [...].³⁴

Lo particular de este discurso es que termina igualando a las ONG con la CVR, puesto que aquellas «personas» dedicadas a trabajar con las ONG terminaron laborando en la sede regional de la Comisión. Y estas «personas», además, eran representadas en el discurso periodístico como «contrincantes ideológicos» de Sendero Luminoso; es decir, «juez y parte» en el proceso de reconstrucción de la memoria sobre la etapa de violencia. Otro editorial, publicado también por *La Calle*, grafica lo último:

33. *En busca*, N.º 1, p. 3.

34. *La Calle*, 10 de abril de 2002, p. 2.

Entre tanto, han surgido defensores por todas partes [de la CVR], pero especialmente en los medios académicos ligados a ONG y a las denominadas izquierdas moderadas o legales, que en los setentas y ochentas contendían ideológicamente con Sendero, cuando estos preludiaban el inicio de la «lucha armada». En esta oportunidad, siguen conteniendo con ellos, en condiciones más ventajosas que entonces y con la CVR como escudo, por supuesto [...] Los senderistas sobrevivientes, aprovechando el resquicio de tribuna que les han dado los de la CVR, cuando fueron a recoger sus testimonios en las cárceles, han dejado expresa constancia de que «no esperan nada» de esta Comisión, por lo que están resignados a permanecer presos hasta morir, en vista de que su propuesta del Acuerdo de Paz no ha tenido cabida en el Gobierno ni ha convencido a los comisionados. Bernales ha confirmado el temor de los senderistas, cuando dijo que «es ilógico que siquiera se piense en la reconciliación con ellos». En consecuencia, en los senderistas presos, tienen los de la CVR a sus primeros y más convencidos detractores.³⁵

Lo curioso de la cita es que fue publicada a fines de agosto de 2003, cuando la sede regional de la CVR ya había cesado en sus funciones y el país se preparaba para la presentación del Informe Final. Estos prejuicios, que encontraban la torva mano de las ONG detrás de todas y cada una de las acciones de la CVR, se mantuvieron hasta después de la presentación del Informe Final y, en cierto sentido, están presentes hasta hoy.³⁶

Cabe señalar que las ONG fueron el blanco de las críticas de los medios de comunicación de Ayacucho porque despertaron muchos anticuerpos. En primer lugar, durante el periodo posviolencia, las ONG habían ejercido funciones poco habituales para este tipo de entidades; por ejemplo, funciones de representación e intermediación con las poblaciones campesinas.

Estas tareas fundamentalmente de orden político habían sido abandonadas por los partidos —que no pudieron superar la presión de la violencia y la crisis del sistema político partidario—. Asimismo, la representación mediática había sido parcialmente abandonada por los mismos medios durante la guerra y las ONG habían cumplido un papel en este terreno también. Así, sumaron iniciativas que excedieron sus espacios habituales y despertaron muchos celos y envidias.

Diversos estudios de psicología social han enfatizado en la envidia como sentimiento muy frecuente en la sociedad peruana. En efecto, se sostiene que las sociedades de carencias fuertemente jerarquizadas suelen bloquear el ascenso social y las oportunidades solo se abren para muy pocos. Por ello, todo el que sube despierta envidia y deseos de tumbarlo, para igualarlo en las carencias.³⁷

Durante los años noventa, las ONG, con el apoyo de las financieras internacionales, desarrollaron numerosos proyectos de intervención en las comunidades campesinas del departamento, en clara competencia con los programas sociales clientelísticos auspiciados por el Gobierno de Fujimori. Asimismo, las ONG impulsaron demandas a favor de los derechos humanos, reclamando la formación de una CVR y, a la vez, se convirtieron en fuente de empleo local de un grupo de profesionales ayacuchanos y capitalinos. Tanto éxito les granjeó muchos enemigos locales.

Esta actitud contra las ONG se reafirmó porque su éxito las había llevado a desplazar a otros actores de sus áreas de influencia. En este caso, se reunieron enemigos

35. *La Calle*, 27 de agosto de 2003, p. 2.

36. Fermín Rivera.

37. Delgado, Carlos, *Problemas sociales*, p. 168.

diversos que acumularon contradicciones con estas entidades. Así, desde los años ochenta se fue abriendo un amplio campo de conflicto con las ONG que se trasladó a la CVR, cuestionando todas sus iniciativas. Los prejuicios se habían desatado. A partir de entonces, la subjetividad sería elevada y el debate parecía de sordos, cada quien reafirmaba su postura sin dialogar verdaderamente con el otro. De este modo, las mismas audiencias iban a ser muy controvertidas.

Las audiencias públicas de Ayacucho y Huanta fueron ácidamente criticadas por la prensa local. Algunos periodistas (como el mesurado Carlos Condori Castillo) señalaron que estas fueron un «show» donde se volvieron a ver «llantos, dolores de un pueblo necesitado de autoconsuelo», mientras que otros periodistas recogían la opinión de algunas instituciones (como los Comités de Defensa Civil de la zona rural de Huamanga) y cuestionaban la selección de los casos mostrados en las sesiones públicas.³⁸

Las audiencias generaron un clima de exasperación y confrontación. Era inevitable, este ejercicio incluía una fuerza liberadora muy profunda, porque significaba recordar en público acontecimientos terribles y dramáticos, asumiendo los sentimientos que generaban de cara a la sociedad. Pero, esa liberación venía acompañada —inevitablemente— por la reiteración del dolor que los actores y los mismos sucesos habían provocado.

Los días 8 y 9 de abril, en el auditorio de la Escuela de Postgrado de la Universidad de Huamanga, hablaron ante los comisionados y las cámaras de televisión apostadas en el lugar la señora Angélica Mendoza y, asimismo, los hijos de Marcial Capelletti, quien fue un dirigente del PAP asesinado por Sendero. En ese momento, un grupo de jóvenes apristas armó una contramanifestación en las afueras del local mientras que, en un salón contiguo, las mujeres integrantes de ANFASEP irrumpían en llanto. Esta audiencia resultó bastante confrontativa en términos políticos.

Los días siguientes, 11 y 12 de abril, en Huanta, varios familiares de ciudadanos desaparecidos o ejecutados durante el tiempo de la violencia expresaron su malestar porque el responsable de la sede regional, José Coronel, no los había convocado para que los comisionados y la opinión pública conocieran sus testimonios. Aquí, el conflicto fue con personas que querían hablar y no estaban programadas.

Aunque en grado menor a lo sucedido previamente en Huamanga, también en Huanta la audiencia resultó difícil de conducir. Las expectativas eran enormes y mucha gente creía que bastaba hablar en las audiencias para ser sujeto de reparaciones por el Estado. A su vez, se pensaba en la situación inversa, y se creía que no accedería a reparaciones quien no hablara en las audiencias. Esas elevadas expectativas dificultaron un análisis más sereno del trabajo de la CVR.

Pero, no todas eran críticas. La CVR también recibió comentarios positivos y apoyos sostenidos. Por ejemplo, algunas organizaciones interesadas en el tema de los Derechos Humanos y reunidas en la Red de Integración por la Paz y la Vida emitieron un pronunciamiento rechazando la sistemática campaña que desarrollan algunos «malos periodistas» que distorsionan la información o cuestionan sin fundamento el trabajo de la CVR. Este pronunciamiento demandaba continuar con el proceso de búsqueda de la verdad, de la justicia y reparación.³⁹

38. *La Calle*, 8 de abril de 2002, p. 3; 13 de mayo de 2002, p. 3.

39. Cueto Cárdenas, Mario, *Ayacucho*, p. 151.

Entre los defensores de la CVR ha primado la idea de que existen periodistas muy afanados en obtener ventajas personales. Estos no se guiarían por los principios de búsqueda de la verdad y comunicación oportuna, que guían esta profesión. Por ello, uno de los puntos de los defensores de la CVR ha sido marcar distancias con los llamados «malos periodistas». En esta interpretación, hay mucho periodismo «mermelero», que se vende para emitir una opinión y que habría distorsionado interesadamente el trabajo de la CVR.

A lo largo de 2002 continuaron las críticas de la prensa a la Comisión, pero eclipsadas por la información relacionada con la coyuntura electoral. En este año se realizaron las elecciones para el Gobierno regional y las municipalidades y la prensa brindó mayor cobertura a las actividades de los candidatos a la presidencia del Gobierno regional. Cabe destacar que estas elecciones se desarrollaron alrededor de una agenda independiente de la problemática de DDHH. En otras palabras, el tema de la CVR no fue uno de los centrales en el debate electoral.

Al siguiente año reaparecieron los titulares y editoriales sobre la CVR, especialmente en los instantes previos a la presentación de su Informe Final. Así, la irregularidad en la información ha estado presente a lo largo de todo el trabajo de la CVR. No ha aparecido en forma constante en los medios. Por el contrario, es un tema que ha entrado y salido de los titulares a lo largo de los años. Otras noticias lo desplazaban, hasta que reaparecía coincidiendo con ciertas fechas del año, a modo de una efeméride. Su aparición en medios registra una forma oscilante, aunque va declinando con el paso del tiempo.

6. LA PRENSA LOCAL Y EL INFORME FINAL DE LA CVR

En los últimos días de agosto de 2003, la Comisión de la Verdad y Reconciliación culminó con la elaboración del Informe Final y dispuso lo necesario para su presentación pública. En Ayacucho, la sede regional culminó sus tareas encomendadas, redujo al mínimo su personal y empezó a hacer los preparativos para la presentación del Informe Final en Huamanga.

Tal como estaba programado, el Informe fue presentado primero en Lima, en Palacio de Gobierno, ante el presidente de la República, Alejandro Toledo, y la presidenta del Consejo de Ministros, Beatriz Merino, en una sencilla ceremonia realizada el 28 de agosto de 2003.

Al día siguiente, en la Plaza Mayor de Ayacucho, la CVR presentó el Informe Final en medio de un complejo ritual iniciado por el alcalde de aquellos días, que presentó la ceremonia; luego fue el turno del entonces presidente regional, el dirigente del PAP Omar Quesada, quien tuvo una intervención básicamente firme y de orientación netamente política. Finalmente, tomó la palabra el presidente de la Comisión, Doctor Salomón Lerner, cuyo mensaje fue traducido simultáneamente en quechua por José Coronel. A esa hora, miles de personas se congregaban en la Plaza Mayor de la ciudad.

Inicialmente ocuparon la Plaza de Armas grupos de personas que no se reunían, sino que mantenían su distancia. Con ello expresaban la desconfianza que primaba entre los sectores sociales y políticos organizados. Luego, conforme se fue juntando más gente, y el discurso principal estaba por comenzar, se reunió una multitud más compacta. Sin embargo, en ningún momento llegó a fundirse en un solo sentimiento, siguió siendo una masa en conflicto entre sus partes integrantes. Los militantes coreaban consignas distintas, que expresaban posturas también diferentes con respecto al

sentido de la ceremonia. Confundidos entre la gente se hallaban expectantes los periodistas de Ayacucho.⁴⁰

Los medios de comunicación locales esperaron con bastante expectativa la presentación del Informe Final, no solo para conocer las conclusiones a las que había llegado la CVR luego de varios meses de intensa labor, sino principalmente para contrastar sus opiniones con las del grupo de trabajo, puesto que la mayoría de periodistas manejaba un discurso propio sobre lo acontecido en el periodo de violencia política.

Por ejemplo, este discurso se hizo evidente durante los eventos organizados por los gremios periodísticos de la ciudad (la Asociación Nacional de Periodistas, el Centro Federado de Periodistas de Ayacucho) conmemorando el vigésimo aniversario de la muerte de los ocho periodistas en Uchuracchay. A fines de enero de 2003, se realizó una mesa redonda en la que participaron el relacionista público de la CVR-Sede Regional, el antropólogo y periodista Juan Camborda Ledesma, de quien ya hemos presentado algunas de sus opiniones, y también el periodista Carlos Infante Yupanqui, en representación de los gremios periodísticos y de los familiares de los periodistas asesinados en Uchuracchay.

Se trataba de una discusión muy reveladora porque encaraba un punto crucial. En efecto, el asesinato de Uchuracchay produjo un enorme impacto en la opinión pública nacional. Además, las víctimas eran periodistas y el gremio ha tomado el caso con extrema sensibilidad. Igualmente importante era el previo informe de la Comisión Investigadora dirigida por Mario Vargas Llosa, que había atribuido el crimen a un desgraciado malentendido provocado por la exasperación y temores generados por la crueldad de la guerra interna, descartando una posible participación directa de las Fuerzas Armadas.

En medio del debate, Camborda señaló que la CVR había investigado y determinado responsabilidades, pero por el momento no podía dar información adicional puesto que el caso iba a ser propuesto para su judicialización. Por su lado, Infante sostuvo que los familiares de las víctimas —quienes, según él, no habían sido convocados por la CVR para brindar su manifestación y colaborar en la investigación de los hechos— sabían quiénes eran los responsables y solo esperaban que la CVR avalara dicho conocimiento. Infante se refería a los supuestos «sinchis» y militares que, disfrazados como campesinos, habrían asesinado a los periodistas.⁴¹

Al final, la CVR no avaló esta suposición y el Informe fue duramente cuestionado por los familiares de los periodistas asesinados. Para la mayoría de los hombres de prensa de Ayacucho, el Informe de la Comisión de la Verdad simplemente repitió las conclusiones previas de la Comisión Vargas Llosa. En su apreciación, este punto era un error de la CVR, que no se habría atrevido a contradecir al famoso escritor.⁴²

El discurso de los periodistas ayacuchanos sobre la violencia política reposa sobre una interpretación crudamente materialista de las causas de la guerra interna, semejante a aquella «idea crítica» de la historia peruana descubierta por Patricia Oliart y Gonzalo Portocarrero en los centros educativos populares.⁴³

40. En la descripción del mitin coinciden los entrevistados, ubicados en otros temas en posturas radicalmente distintas.

41. Información de Nelson Pereyra, quien estuvo presente en el mencionado debate.

42. Fermín Rivera y Mario Cueto.

43. Portocarrero, Gonzalo y Patricia Oliart, *El Perú*.

Esta postura considera que la guerra interna fue originada por la estructura de dominación y explotación, que desde la era colonial se expresa en jerarquías sociales y étnicas muy rígidas y verticales. La explotación colonial habría sobrevivido dentro de la república e incluso se habría ampliado bajo el liderazgo de los criollos de Lima. Así, el racismo, la segregación y el centralismo seguirían siendo los factores principales de la historia peruana hasta el presente. Por ello, la rebelión era inevitable; se trataba de la lucha de los desesperados, abandonados a su desgraciada suerte por un sistema ciego e injusto.

Un editorial del diario *La Calle* señala que «mientras haya pobreza, desigualdad, injusticia, corrupción, robo y actitudes dictatoriales, de manera estructural y consentida, la violencia estará siempre en gestación, amenazando con nacer, irrumpir, arrasarse, ensangrentar».⁴⁴ En otras ediciones, el editorial de dicho periódico insistía en considerar a los factores económicos o a la pobreza como las causas de la violencia.⁴⁵

Pero el Informe Final de la CVR dejaba de lado esta interpretación estructuralista de la violencia y se centraba en el accionar del PCP-Sendero Luminoso y en la agresiva respuesta del Estado durante los años ochenta. Para la Comisión, los factores más estructurales eran un marco clave para entender la violencia, pero esta había estallado a raíz de la decisión de Sendero de sublevarse en forma sangrienta. Esta decisión fue seguida por otra, en esta ocasión de las FF. AA., que enfrentaron la guerra interna sin mayor respeto por los derechos humanos.

Por ello, la CVR fue inmediatamente objeto de crítica por parte de periodistas que no compartían este punto de vista, calificado como voluntarismo. Lejos de relevar los factores estructurales, la Comisión habría incurrido en idealismo, pues la voluntad de los insurrectos sería la causa de la guerra interna. En esta interpretación, los integrantes de la Comisión habrían querido atribuirle a Sendero la responsabilidad por los sucesos. Se trataría de una sanción política contra Sendero.⁴⁶

Para estos periodistas ayacuchanos era inconcebible que la causa de la violencia fuera la voluntad de Sendero Luminoso de levantarse en armas. Para este punto de vista, lo importante era averiguar ¿por qué Sendero Luminoso había logrado simpatía y sostener una larga guerra?; si hubieran sido unos dementes ¿habrían sido arrasados en pocos meses? No lo fueron, sino que el movimiento prendió y se extendió por todo el país. ¿Cuáles podían ser las causas? La respuesta sólo podía ser una: las condiciones objetivas estaban maduras para un estallido de violencia. La culpa no era de Sendero, sino del hambre y la dominación.⁴⁷

Asimismo, una buena parte de los periodistas locales reclamaban su derecho a pensar de manera distinta a la Comisión y de elaborar sus propias interpretaciones en torno a la época de violencia (por lo tanto, de discrepar del Informe). La libertad de pensamiento era aludida para fundamentar una actitud crítica ante la Comisión.

En el momento presente, cuando ya se tiene el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, documento que nunca más será secreto, lo primero que tenemos

44. *La Calle*, 14 de enero de 2003, p. 2.

45. *La Calle*, 11 de septiembre de 2003, p. 2.

46. Fermín Rivera.

47. Fermín Rivera.

que reconocer es el derecho que tienen los peruanos del mundo, a pensar con libertad sobre el Informe, a elogiar sus aportes si es que los tiene, a criticar sus deficiencias, a cuestionar sus intenciones, a opinar integralmente sobre el Informe! [...] Nadie, pues, tiene la patente de corso o autoridad absoluta, sobre el parecer que tiene cada quién acerca del Informe, o para obligar a que se piense de una manera o de otra, sobre un documento que, efectivamente, es público, instrumental, estudiable y debatible, por lo tanto sujeto a ser visto desde diferentes ópticas. Actuar de modo contrario a nuestra diversidad constituiría caer, dentro de la denominada sociedad democrática peruana, en los callejones oscuros de la dictadura, a la que tanto criticamos, o en el fanatismo anti-científico que tanto daño hizo a sus practicantes.⁴⁸

Además, periodistas locales discreparon con la presentación del Informe Final de la CVR en dos aspectos que consideraron cruciales: la forma como se presentó y los enunciados relacionados con los medios de comunicación durante la época de violencia.

Con respecto a lo primero, muchos periodistas coincidieron en señalar que la presentación pública del Informe, en un gigantesco escenario instalado en la Plaza Mayor de Ayacucho, había sido un «derroche de dinero». En opinión de algunos, una «cachetada a la pobreza ayacuchana», completamente inadecuada para una ciudad en la que la mayoría de sus habitantes viven en una situación de necesidad.⁴⁹

Este debate comenzó con la instalación en la Plaza de Armas de Huamanga de un estrado concebido como gigantesco retablo. Días antes de la presentación del Informe, los ayacuchanos ya comenzaban a debatir sobre el carácter aparatoso, en opinión de sus críticos, del estrado para la ceremonia de presentación del Informe. Además, el espectáculo artístico montado por el conocido grupo teatral Yuyachkani fue percibido como artificial. Ambos puntos se mezclaron y, como resultado, algunos ayacuchanos salieron disgustados de la Plaza de Armas. De acuerdo con esta opinión, la CVR había trabajado para el mundo externo, pero sin reparar en la sensibilidad local.⁵⁰

Mario Cueto Cárdenas, corresponsal de la emisora RPP en Ayacucho y columnista del diario *La Calle*, afirma que en un evento realizado en julio de 2004 (casi un año después de la presentación del Informe), que congregó a periodistas ayacuchanos y ex comisionados de la CVR, los primeros plantearon comentarios que disgustaron a estos últimos, «como el caso del gasto efectuado para la preparación del gigantesco estrado en la Plaza Mayor que paralizó el tránsito durante 10 días, hecho que fue observado como un exceso».

Ante este argumento crítico, en dicho evento y siempre siguiendo el relato de Mario Cueto, los ex comisionados respondieron señalando ese gasto como efectuado gracias a un financiamiento especial de la cooperación internacional, que no correspondió a dinero del presupuesto de la CVR. Habría sido un aporte externo de última hora, destinado especialmente a ese fin y, por consiguiente, no se habría malgastado presupuesto propio.⁵¹

Además, en ese mismo evento, los comisionados habrían explicado que Ayacucho debía reparar que en ocasiones la región era sujeto de observación y análisis por el

48. *La Calle*, 30 de agosto de 2003, p. 2.

49. Mario Cueto.

50. *La Voz*, 30 de agosto de 2003, p. 3.

51. Cueto Cárdenas, Mario, *Ayacucho*, p. 140.

resto del país e incluso del planeta. Pues bien, en ese tipo de circunstancias era preciso lucir bien y un estrado que realizara la presentación no debía haber sido visto como insultante, puesto que no lo era.⁵²

Las críticas al estrado y al evento aparecieron en todos los medios de comunicación en los días sucesivos al 29 de agosto. Pronto iba a surgir otra crítica centrada en el supuesto derroche económico en el que habría incurrido la CVR. En esta ocasión se trataba de la acusación sobre los gastos de investigación. El diario *La Calle* sostuvo:

Ya se sabe que en todo este tiempo de investigación, se ha gastado la friolera de doce millones de dólares, procedentes del Estado peruano, en su gran parte y desde el extranjero, en porcentaje menor.⁵³

Los doce millones de dólares iban a constituirse en una letanía que repiten a menudo todos los críticos locales de la CVR.⁵⁴ Por su parte, los integrantes de la sede regional de la Comisión explican que una investigación significa gastar en honorarios de personal calificado, viajes al interior y viáticos para recoger testimonios en medios rurales. Además, analistas, abogados y labores de difusión también tienen un costo y, en este sentido, no se habría producido ningún derroche. Por último, ese gasto debe ser visto como una modesta inversión en propender a que la verdad y la reconciliación se abran paso entre los peruanos y peruanas.⁵⁵

Asimismo, los periodistas críticos a la CVR destacaron que algunos comisionados habían cobrado jugosos sueldos. Por ejemplo, se levantó mucho el caso del ingeniero Carlos Tapia, quien fue constantemente denunciado por supuestamente cobrar doble sueldo al Estado, por un lado como pensionista y por el otro como comisionado. También se sostenía que ambos haberes eran sustanciosos. Esta acusación se repetía en el caso de Alberto Morote, quien es ayacuchano, pero no gozaba de las simpatías locales y fue constantemente hostigado por la prensa huamanguina.⁵⁶

En realidad, esta campaña prolongaba la idea que ya presentamos, según la cual la CVR era una extensión de las ONG de DDHH. Como hemos visto, para esta versión, las ONG vivían confortablemente gracias a explotar la problemática de la violencia para provecho propio. En ambos extremos se enjuiciaba a un grupo que supuestamente trabajaba alimentándose de la desgracia ajena.

En opinión de quien fuera relacionista público de la CVR en Ayacucho, Juan Camborda, estas críticas eran malintencionadas y elaboradas por algunos periodistas que ya habían definido una actitud completamente crítica contra la Comisión. Según su opinión, se trataba de un conjunto de prejuicios que se pusieron a circular, sin verificar ni mesurar las noticias. Por ejemplo, dice Camborda, ¿por qué estos periodistas no informaban que otros comisionados no cobraban?⁵⁷

52. José Coronel.

53. *La Calle*, 29 de agosto de 2003.

54. No he necesitado preguntar por el punto, para que en todas mis entrevistas haya emergido en forma espontánea, tanto en contra como a favor.

55. José Coronel.

56. Un ejemplo en *La Calle*; a partir del 10 de septiembre de 1981 tuvo muchas críticas a raíz de su nombramiento.

57. Juan Camborda.

De acuerdo con su postura, los ataques contra la CVR habrían estado fundados en las posiciones previas que estos periodistas habrían tenido durante la guerra. Ni siquiera habrían leído a fondo el Informe; quizá algunos sí, pero no todos los que atacan sañudamente a la CVR. Resalta que coinciden en sus ataques prejuiciosos tanto aquellos periodistas que durante la guerra estuvieron cerca de SL, como los que estaban de parte de las Fuerzas Armadas. De acuerdo con su interpretación, los periodistas partidarios de ambos contendientes se juntan bajo la mesa para oponerse a los partidarios de la paz y los DDHH.⁵⁸

Esta última idea es muy relevante. En efecto, periodistas entrevistados que expresan comprensión hacia uno u otro de los contendientes armados difieren en su interpretación de los sucesos casi íntegramente. No obstante, mantienen un pequeño punto de acuerdo, cual es su apreciación sobre la CVR. En efecto, de acuerdo con ambas posiciones extremas, la Comisión habría sido manipulada por las ONG de DDHH con propósitos subalternos.

Pero, como hemos visto, la interpretación de los partidarios de la CVR sobre esta coincidencia es muy distinta. De acuerdo con su parecer, la Comisión halló que ambos contendientes habían violado los derechos humanos de la población civil. Sendero habría iniciado ese envenenado camino que ambos contendientes recorrieron. Las fuerzas del orden fueron convocadas por el Estado para controlar la situación y cumplieron con su deber, pero cometieron excesos, por los cuales la Comisión los habría encarado y ello habría despertado las animosidades de ambos contendientes. Abonaría a favor de la CVR esta unanimidad de los beligerantes, porque expresaría que la comisión habría sido consecuente con sus hallazgos y no habría ocultado su crítica a los señores de la guerra.⁵⁹

En segundo lugar, los periodistas ayacuchanos estuvieron disconformes con los enunciados que el Informe Final contenía sobre el papel de la prensa durante el periodo de violencia. Para la prensa local, si bien el Informe reconoce la función importante que los medios de comunicación cumplieron durante el conflicto y rinde homenaje particularmente a los periodistas asesinados en Uchuracchay, sin embargo omite a los demás periodistas que murieron en medio del conflicto y se minimiza el papel global que habría cumplido la prensa regional.

Para el quincenario *Horas de Lucha* (dirigido por el periodista Magno Sosa), «lo que ha llamado poderosamente la atención, en el informe de la CVR, es que no se haya mencionado el heroico papel que desempeñaron los periodistas de verdad, periodistas de la guerra, donde unos pagaron con sus vidas el derecho de informar y otros salvaron de morir milagrosamente [...]».⁶⁰

El periodismo regional quedó muy fastidiado con el Informe, especialmente con el capítulo sobre la violencia en la región. Su principal queja era que habían sido ignorados. Las estrellas locales del periodismo no fueron fuente importantes, ni siquiera estaban mencionados, y ese aparente menosprecio fue duramente resentido. Por ejemplo, Mario Cueto, quien gracias a su amplia trayectoria es una reconocida personalidad gremial, relata que fue entrevistado por la CVR en forma apurada y que luego sus opiniones no fueron tomadas en cuenta.⁶¹

58. Juan Camborda.

59. José Coronel.

60. *Horas de Lucha*, 11 de septiembre de 2003, p. 6.

61. Mario Cueto.

Así, los prejuicios que habían venido operando se potenciaron. La opinión mayoritaria de los formadores de opinión fue que no los escuchaban. De acuerdo con su interpretación, esta actitud era la prolongación del centralismo limeño, que habría guiado a la CVR en todos sus actos, desde su conformación. De este modo, un buen grupo de periodistas ayacuchanos interpretaron en forma negativa el trabajo de la Comisión, que fue catalogado como superficial. Al no comprender al mundo andino, la Comisión habría tratado los temas con ligereza y sin penetrar realmente en el sentido profundo de los acontecimientos.⁶²

Posteriormente a la emisión del Informe y por aproximadamente seis meses hubo debates en Ayacucho sobre las conclusiones de la CVR. Por ejemplo, se desarrolló una mesa redonda en la universidad, también hubo conversaciones en distintas estaciones de radio y en la TV local. Por lo general, se atacó a la Comisión con los argumentos que hemos venido exponiendo y la defensa de su labor subrayó un punto crucial. De acuerdo con Juan Camborda, la importancia de la CVR radicaba en presentar un parecer fundado en el punto de vista de la población civil, atrapada por el fuego de contendientes armados que violaron los DDHH. Los insurrectos apelaban a su voluntad de rebeldía y el Ejército sustentaba que la sociedad los había llamado y solo habían asumido sus responsabilidades. Pero, ambos contendientes habían ignorado los derechos de los no combatientes. Con ese argumento, Camborda se defendió en los debates, que fueron cordiales, pero intensos.

Asimismo, hubo un evento bien organizado por la ONG Servicios Educativos Rurales-SER. Sin embargo, el público y los ponentes en las mesas eran integrantes de las ONG. No se lograron canales efectivos con la población local, menos con sus periodistas. En este punto coinciden tanto defensores como críticos de la CVR. En alguna medida, los eventos posteriores a la emisión del Informe atrajeron básicamente a los trabajadores de las ONG y no llegaron al gran público.⁶³

En estos foros, los temas que más se debatieron fueron tres: i) la Universidad de San Cristóbal de Huamanga y su papel en la gestación del terrorismo, ii) el asesinato de los periodistas en Uchuracchay, y iii) las reparaciones, sus montos y a quiénes les debería alcanzar y de qué forma deberían ser. Alrededor de esos puntos fue el debate local. Aunque los tres temas tenían actualidad, el debate no llegó a encenderse, no hubo una agenda política sistemática alrededor del Informe.

Otro tema que fue ampliamente debatido entre las personas más interesadas en la vida cívica local fue la responsabilidad de los partidos durante la guerra interna. Pero, el caso es que, después de 2006, en los hechos, los partidos políticos decidieron ignorar el Informe. Su trascendencia ha sido menor a la esperada, pero no por causas intrínsecas a la CVR, sino porque estos agentes cruciales para su posible impacto se sintieron ofendidos. Se les hablaba claro, directo y no estaban acostumbrados a que les refregaran la plana. La barrera de comunicación entre la Comisión y el sistema de partidos políticos resultó crítica sobre todo después de emitido el Informe, cuando se trataba de recoger sus propuestas para reorganizar la vida política peruana.⁶⁴

62. Juan Camborda, quien participó en los debates representando a la CVR y resume de esa manera el argumento de sus adversarios.

63. Juan Camborda y Fermín Rivera.

64. Juan Camborda.

También conspiró contra su impacto el empaque muy académico del Informe. Se trataba de varios tomos y el volumen de síntesis era antropológico y comprensivo, aunque poco político, además de demasiado extenso. Faltó una versión de síntesis concebida realmente para el público común y corriente. Tampoco había video que presentara el relato en imágenes y se carecía de todo medio moderno de difusión. En el momento de la presentación del Informe en Ayacucho, el único elemento de propaganda era un *brochure* elaborado por la sede regional.⁶⁵

La indiferencia ciudadana ha sido un telón de fondo de los debates sobre la CVR. Fuera del sector politizado, donde se desarrolló la confrontación de ideas y sentimientos que venimos mostrando, la mayoría de la gente común pensaba que era un tema incómodo. En muchos círculos de ciudadanos simples y corrientes se escucha decir que esos acontecimientos fueron espantosos, que felizmente ya pasaron, que con mucho esfuerzo se ha podido voltear la página, seguir viviendo y olvidar.

De acuerdo con ese razonamiento, el trabajo de la CVR es inútil y hasta peligroso, quiere reabrir heridas sin saber cómo volverlas a cerrar. Así, mucha gente ha cerrado sus oídos a los mensajes de la Comisión, sin querer saber nada de sus labores. Vencer ese sentimiento defensivo era una tarea que excedía las reales posibilidades de la CVR. Pero, por otro lado, interesa recordar que este parecer no fue el único que se presentó en la sociedad local y en los medios de prensa. Como hemos visto a lo largo de estas páginas, se desarrolló un cruce de posturas y numerosos contrapuntos.⁶⁶

En este sentido más general del término, midiendo su impacto en un horizonte temporal largo, los defensores de la CVR alegan que el valor del Informe Final es su capacidad inspiradora de una reflexión seria sobre la violencia y los medios para evitarla. Así, en el largo plazo, ha de ser fuente indispensable para trabajos de investigación y de formulación de políticas públicas. Su valor consiste en pautar la agenda política de las décadas siguientes. En ese sentido, es un trabajo abierto y vivo, que continúa presente. De acuerdo con esta interpretación, el Informe sería exitoso y la prueba se hallaría precisamente en la continuidad y articulación que ha logrado. A la larga, esas virtudes han de concluir formando a la opinión pública en torno a sus conclusiones.⁶⁷

Siempre de acuerdo con este punto de vista, la reconciliación era una tarea muy difícil. Ella fue una responsabilidad añadida por el Gobierno de Toledo, complementando el encargo inicial recibido de Paniagua, que no la incluía. Para Paniagua, la Comisión simplemente debía esclarecer la verdad de los sucesos. En realidad, la reconciliación no dependía enteramente de la CVR. Ella debía crear el ambiente y, de hecho, fue así, pero la Comisión no podía forzar la situación. Ello porque los protagonistas de la guerra interna, los contendientes, debían dar un paso al frente y perdonar a sus enemigos. Ninguno lo hizo y lograrlo escapaba de las manos de la Comisión.

65. José Coronel. Por ejemplo, en 2004 la ONG SER publicó en cinco volúmenes los capítulos del Informe Final que versan sobre la violencia en el departamento de Ayacucho, y la nómina de víctimas y desaparecidos de Ayacucho elaborada por la CVR. Estos ejemplares, si bien fueron distribuidos a las ONG y a las bibliotecas públicas de las ciudades de Huanta y Ayacucho, no constituyen un resumen del Informe; solamente se limitan a compilar lo escrito con relación a Ayacucho.

66. Mario Cueto.

67. Juan Camborda.

El Informe de la CVR no razona desde la postura de los combatientes. Por el contrario, es un texto de interpretación, muy exacto y científico, pero que parte de la idea que los comisionados tenían del proceso de la violencia. Sí se recabaron testimonios de combatientes de ambas partes, pero el Informe razona desde el punto de vista de la Comisión. En ese sentido, no repite las opiniones recogidas sobre las causas, acciones y consecuencias de la guerra. De ahí que se hayan escuchado críticas de entrevistados que hablaron y luego no han visto aparecer su punto de vista. En esa crítica coinciden ambos contendientes.⁶⁸

Asimismo, los críticos a la CVR alegan que los testimonios recogidos son muy dramáticos. Se habría buscado recoger abundante información sobre penalidades y sufrimiento, pero la Comisión habría dejado de observar otros sentimientos y experiencias también presentes durante la guerra interna, como por ejemplo: solidaridad, valor, compromiso, afán vital, etc. En esta interpretación, la CVR habría dramatizado para conseguir un efecto y este no habría sido otro que el interés de las ONG de seguir lucrando con la problemática.⁶⁹

Por su parte, los defensores de la CVR niegan la afirmación anterior. Según este parecer, el mandato de constitución de la Comisión orientaba el tipo de investigación y la naturaleza de los informes a recoger. No se trataba de una investigación académica, que puede ser comprensiva, sino de un trabajo guiado por un marco legal. De una forma curiosa, en este punto, los defensores de la CVR acaban sosteniendo que sus detractores pierden de vista la legalidad de las cosas.⁷⁰

7. LA SITUACIÓN ACTUAL

Como hemos revisado, las relaciones entre la CVR y los periodistas ayacuchanos se desarrollaron a través de una serie de polémicas y cuestionamientos. Se produjo una seguidilla de debates que permitieron hacer aflorar sentimientos y planteamientos que venían del pasado y se cruzaron en el camino de la Comisión.

El primero de estos debates se encendió desde el momento mismo en que el Gobierno de Paniagua decidió constituir la CVR. El Gobierno eligió para integrarla a un grupo de destacadas personalidades, buscando conscientemente que impactara su seriedad y compromiso ético. Asimismo, el Gobierno quería que algunos de sus integrantes fueran profundos conocedores de la problemática de la violencia. Por su parte, algunas instituciones medianamente representativas de Ayacucho deseaban otros nombres, más vinculados a la región y con mayor participación de las asociaciones de familiares de víctimas.

Esa tensión no se resolvió; por el contrario, continuó agravándose, puesto que dos Gobiernos nacionales nombraron comisionados —Paniagua y Toledo—, y ninguno de los dos recogió los planteamientos de incluir la participación de las víctimas. Cabe preguntarse ¿por qué? No hay una respuesta clara, porque los Gobiernos nacionales no

68. Nuevamente me remito a mis entrevistas con periodistas comprensivos de las posiciones de uno y otro contendiente armado.

69. Fermín Rivera.

70. Información del historiador Iván Hinojosa, quien fue responsable del equipo de investigación central de la CVR.

explicitaron sus razones. Pero, en el terreno especulativo, solo cabe pensar que, efectivamente, los Gobiernos nacionales pensaban que era mejor independizar la CVR de las presiones locales, que la mejor combinación era una autoridad ética como Lerner, sumada a algunos estudiosos como Degregori, pero sin la presión cotidiana de las fuerzas regionales, que podían desnaturalizar la independencia de criterio indispensable para llegar a resultados significativos.

Esta polémica permitió que afloraran sentimientos contradictorios con respecto a las ONG. Para un sector de la intelectualidad regional, las ONG, sobre todo las de DDHH, han vivido de la violencia, explotando para su provecho personal el drama del pueblo ayacuchano. Ese sentimiento parece una expresión colectiva de envidia ante la posición de fuerza y poder que fueron ganando las ONG en un contexto de resquebrajamiento de la sociedad civil, creciente indiferencia ciudadana y pérdida de legitimidad de los partidos políticos. Todos los actores sufrieron mucho con la violencia y las ONG emergieron con mayor poder relativo. En ese contexto, los otros actores las detestaron y concibieron una opinión de ellas como rivales aprovechados. Esa imagen se trasladó a la CVR a través de algunos de sus integrantes, tanto provenientes de Lima como de la sede regional de Ayacucho.

Para algunos periodistas ayacuchanos, esa contradicción ha sido interpretada como fruto de los choques históricos entre la capital y el interior del país. Se han encontrado dos lógicas que pocas veces dialogan y no logran entenderse. La CVR estaría representando una de esas dinámicas, la del centro, vinculada a Occidente y, a través de las ONG, con el mundo exterior. Mientras que la sociedad ayacuchana y sus medios de comunicación expresarían otra lógica, definida vagamente como «andina». De acuerdo con esta concepción, un occidental no va a entender las tragedias del Ande y, por eso, su trabajo ha sido superficial. La Comisión no habría producido frutos porque sus integrantes no estaban compenetrados con la tierra.

Estos debates continuaron una vez que la sede regional se puso a trabajar y organizó las audiencias. Como vimos, ellas fueron difíciles de manejar y bastante conflictivas. Algunos periodistas opinaron que fueron espectáculos montados para provocar escenas de sufrimiento y dolor. En esta postura se habría abusado de la escenografía para desgarrar nuevamente a la sociedad. Por el contrario, para los defensores de la CVR, era inevitable la catarsis, se trataba de conducirla a un resultado serio, que fundamentara políticas de reconciliación.

A estas alturas ya había bastante amargor circulando, que se profundizó al ser presentado el Informe de la CVR en Ayacucho. El debate sobre el enorme estrado dio paso a serios cuestionamientos sobre el total de gastos efectuados. El mismo sector que atacó a la CVR desde su nacimiento sostuvo que se había gastado en forma excesiva y buscó hacer escándalo frente a la opinión pública, deslizando que se trataba del derroche *versus* la pobreza reinante en Ayacucho. Por el contrario, los defensores de la CVR mostraron que los gastos habían sido medidos y en consonancia con el mandato. Asimismo, que el presupuesto correspondía al producto que se exigía y que —finalmente— este fue entregado a tiempo.

Como vemos, estamos frente a una serie larga de controversias, que a esas alturas aún no habían terminado. Al entregar el Informe Final, los periodistas locales se buscaron en las páginas del texto y apenas si se encontraron. Ya tenían sospechas de que no los iban a considerar tanto como deseaban, porque no habían sido entrevistados con el cuidado que esperaban. Pero, el Informe no los citaba ni tomaba como fuente principal. Tampoco rendía el homenaje que pensaban que merecían los periodistas

caídos durante la guerra. Estos nuevos factores de discordia produjeron una nueva oleada de críticas a la CVR. Esta ha sido la más importante, puesto que resume las anteriores, y se construye alrededor del producto final. Ya no se trata de críticas a los integrantes, sino al resultado de su trabajo. Como consecuencia, un grupo de periodistas ayacuchanos opina que el trabajo de la CVR no vale mucho.

Estas polémicas traducen los alineamientos previos de los hombres de prensa. En realidad, durante la guerra cristalizaron posiciones definitivas, que tuvieron mucho de ocultamiento y doblez. Fue una guerra no convencional. No hubo territorios liberados, sino que sobre el mismo espacio coexistieron dos fuerzas en pugna, una abierta y la otra oculta, pero ambas muy presentes. Para sobrevivir, los periodistas tuvieron que sobrepasar una serie de circunstancias difíciles. Y, de hecho, varios no lo lograron, y la lista de periodistas caídos es considerable. Pero, los periodistas locales fueron presionados durante la guerra a adoptar posición y lo hicieron para siempre. La posición que cada uno tiene frente a la guerra es para esa persona una verdad incommovible.

Esas convicciones se opusieron frente a la CVR. En efecto, hombres de prensa que, con la discreción debida, habían sido partidarios tanto del orden como de la insurrección, coinciden en denigrar a la Comisión. Esta coincidencia es un dato crucial. Según unos, es consecuencia de lo evidentes que fueron las fallas de la CVR. Para los otros, es prueba de lo acertado de la Comisión, que supo precisar las violaciones a los DDHH cometidas tanto por Sendero como por el Estado.

Por su parte, los dueños de los medios de comunicación suelen ser mucho más prudentes que los periodistas. Por ejemplo, los propietarios de *La Calle* publican un editorial furibundo contra la CVR pero, páginas más adelante, otro columnista matiza la postura. Asimismo, en una edición siguiente, se puede hallar una separata conteniendo parte del Informe Final. Atacan con una mano y con la otra defienden o, cuando menos, divulgan. Los dueños apuestan a un público heterogéneo, donde hallar lectoría significa combinar discursos, para lo cual es preciso contratar periodistas de orientación distinta. Así, los dueños más dinámicos, como los propietarios de conglomerados, impresos, radio y TV, quieren quedar bien con sectores distintos de la opinión pública y manejan la información como negocio.

Con respecto a la trascendencia del Informe Final, al ser emitido tuvo unas semanas como principal tema de agenda en los medios de prensa. Luego se opacó y reaparece para sus aniversarios. Es un tema de aparición intermitente, aunque regular; se ha ido convirtiendo en una efeméride. Pero, su tendencia viene siendo declinante; ha ido disminuyendo su cobertura paulatinamente y no tuvo tanta influencia como esperaban en la CVR.

En efecto, el caso es que sus conclusiones y recomendaciones no logran reaparecer en cada coyuntura política regional. Este punto es clave porque, si bien podría disminuir progresivamente la cobertura periodística sobre la CVR, también sus conclusiones podrían servir en los debates políticos y orientar la agenda de los candidatos a puestos públicos. Pero, no ha sido así: en los hechos, la sociedad política local pretende prescindir de la problemática desarrollada por la Comisión.

En buena medida, ello se debe a los Gobiernos nacionales de la última década, que han disminuido el Informe de la CVR. La indiferencia gubernamental ha contribuido a su falta de impacto. Los políticos estaban fastidiados por las precisiones del Informe sobre su conducta pública. Así, la clase política ha sido renuente a la problemática y solo a regañadientes ha ido aceptando que el tema continúe.

La aparición de nuevas fosas en las últimas semanas ha reavivado las tensiones locales. De parte de las organizaciones de derechos humanos se vuelve a demandar justicia y sanción y se teme que se trate de nuevas frustraciones. La sociedad ayacu-chana tiene heridas abiertas aún, una mayoría ciudadana es indiferente, mientras que los periodistas continúan muy peleados, reavivando ante cada coyuntura las posiciones que adoptaron durante la guerra interna.

LIMA

EN EL ANÁLISIS DEL CASO DE LA CAPITAL PERUANA vamos a seguir una línea cronológica algo distinta a la aplicada para la región Ayacucho. En este último escenario, habíamos comenzado por el periodo anterior a la CVR y nos detuvimos largamente en el tiempo de trabajo de la Comisión. Pero, no habíamos profundizado tanto en el periodo posterior, que abarca hasta nuestros días, como lo haremos ahora al analizar el caso de Lima. En efecto, para elaborar nuestro argumento sobre la capital comenzaremos también por los antecedentes, pero solo para comprender lo que viene a continuación, porque giraremos lo antes posible al periodo post CVR, donde se focalizará el estudio que presentamos. De este modo, caminando entre los dos escenarios en los que se ha realizado el trabajo de campo, aspiramos a recorrer un marco temporal más completo que cualquiera de las partes por separado.

Al igual que en el caso de Ayacucho, para el estudio referido a Lima hemos realizado varias entrevistas a periodistas y algunos investigadores que han estado cerca o trabajando al interior de la CVR. Los cuestionarios fueron muy libres, pero ordenamos las conversaciones alrededor de cuatro puntos fundamentales. En primer lugar, la importancia que le atribuyen a la CVR y su Informe Final; a continuación, la percepción que tienen sobre el marco legal e institucional bajo el cual se han implementado las recomendaciones propuestas por la CVR; luego, los factores que, a su criterio, influyeron en el proceso de implementación. Y, por último, la apreciación que tienen sobre el rol desempeñado por los medios de comunicación en dicho proceso.

1.- IMPORTANCIA POLÍTICA DE LA CVR

Con la caída del régimen fujimorista y el establecimiento del Gobierno de transición, entre los años 2000 y 2001, se inició una etapa de recomposición de la estructura política nacional. Como hemos revisado en el caso de Ayacucho, en este contexto surgió la Comisión de la Verdad, que representaba para el Gobierno de Valentín Paniagua un instrumento clave del restablecimiento de la democracia, a la cual aspiraba el breve Gobierno de transición. Para ello, partía de establecer la importancia de los valores de justicia y verdad que fundamentaran la transición política desde el fujimorismo a un régimen democrático.

Como queda claro, la iniciativa para formar la CVR partió del Estado, pero sus propósitos eran parte de las consignas manejadas por la oposición democrática desde el periodo de Fujimori. En ese sentido, la medida fue gubernamental, pero en un

momento muy singular del Estado peruano. En efecto, había caído en forma estrepitosa el régimen fujimorista y, como consecuencia, eran muy débiles los poderes fácticos que normalmente gobiernan al Estado peruano. En ese instante de libertad política se inscribe la creación de la Comisión. Seguramente no hubiera habido espacio en el Estado para una iniciativa semejante en ningún otro momento de los 90 y los 2000. Por ello, la CVR es estatal, pero se trata de una criatura muy singular en veinte años caracterizados por Gobiernos poco afectos a los DDHH. Esa excepcionalidad explica, como veremos, buena parte de su suerte posterior.

Así, con la creación de la Comisión de la Verdad en junio de 2001, el Estado dio un paso importante en ese proyecto a largo plazo de construir una nueva sociedad partiendo de la reflexión sobre nuestro pasado más reciente. En ese sentido, el Estado le confirió vitalidad a la sociedad influyendo sobre su rumbo en forma positiva. Normalmente los procesos han sido a la inversa y el Estado ha sido refractario a recibir iniciativas integradoras que surgían de la sociedad.

Aunque, la conformación de la CVR no tuvo consenso en la sociedad, dando lugar a la reproducción de las conflictivas posturas anteriores, aquellas sostenidas durante la guerra. De este modo, se generó una polarización de opiniones sobre la existencia e importancia de la Comisión en nuestro país. Como hemos visto en la sección anterior, esa contradicción llegó a Ayacucho y fue muy profunda, pero conviene tener presente para el análisis que ese pleito se originó en la capital y alcanzó un desarrollo nacional.

Así, la creación de la Comisión implicó una inmediata contradicción política que se ha prolongado hasta hoy. Quienes habían apoyado en todo momento al EP sintieron que la CVR nacía para enjuiciar a los militares. Este sector identificado con las FF. AA. inició una campaña periodística para atacar a la Comisión de todas las maneras posibles. Esa campaña no ha cesado en ningún momento, aunque ha atravesado periodos muy distintos. Al comienzo estuvieron algo agazapados, porque habían perdido el poder y su caída había sido estruendosa, en medio de acusaciones de corrupción y pruebas al por mayor. Pero, se recuperaron, y progresivamente han ido arrinconando a la Comisión y su Informe Final.⁷¹

Por su parte, como quedó claro en el caso de Ayacucho, algunos periodistas que atacan con firmeza hoy en día a la CVR, estaban mucho más recatados cuando ella estaba trabajando. El primer lustro de los 2000 fue duro para las posturas más abiertamente autoritarias. Hoy en día, el viento sopla nuevamente a favor e incluso sueñan con una restauración en las próximas elecciones presidenciales de 2011. Por ello, en muchas críticas que se escuchan en nuestros días a la CVR se halla un anacronismo. Hay cierta proyección hacia atrás de posturas explicitadas el día de hoy, que quizá estos periodistas críticos hubieran deseado hacer públicas ayer, pero o no se atrevían o no lo tenían tan claro.

En la otra orilla, los periodistas más cercanos a la CVR han puntualizado que el principal aporte de la Comisión y su Informe Final es la trascendencia política de sus conclusiones y recomendaciones, que han de permitir conocer mejor al país, sus dilemas y posibilidades reales de superación de muchos de sus traumas. A continuación, el trabajo de la CVR es relevante porque constituyó el primer esfuerzo «real» impulsado desde el Estado por promover una investigación a fondo sobre lo sucedido durante los años de violencia.

71. Diarios *Expreso* y *La Razón*.

De acuerdo con esta interpretación, el trabajo de la CVR permitió conocer y revelar las violaciones contra los derechos humanos que se perpetraron en las décadas de los ochenta y noventa. Como efecto colateral, su labor reavivó en el debate político el interés por los casos de DDHH, despertando —en algunos sectores de la prensa— la urgencia de esclarecer y denunciar los hechos, así como a los causantes de los mismos. Un claro ejemplo de esta actitud impulsada en los medios por la CVR serían los informes sobre DDHH que se pueden hallar en el diario *La República* y en la revista *Caretas*.⁷²

Otro elemento de fondo que destacan los defensores de la CVR como aporte de su Informe Final es que precisó el rol desempeñado por los diversos actores sociales y políticos del país durante el periodo de violencia política. Asimismo, habría puntualizado algunos males sociales seculares, que dificultan la vida democrática y alimentan el resentimiento social. Por ejemplo, el tema del racismo y sus efectos perversos para la integración nacional aparece con mucha nitidez en el Informe de la CVR. Ese diagnóstico integral de la evolución social peruana constituye una herramienta a partir de la cual es posible formular una autocrítica sobre el pasado.⁷³ La idea de la Comisión como liberadora de los demonios interiores que torturaban al país ha sido común a varios periodistas y profesionales que simpatizan con sus conclusiones.⁷⁴

Para Gustavo Gorriti, la importancia de la CVR deriva de haber sentado las bases para la búsqueda de una visión global y objetiva de nuestra historia actual. Por ello, su mérito histórico trasciende a la institución en sí misma, ya que a partir del esclarecimiento de los hechos y las consecuencias de los mismos es posible plantear enseñanzas de largo plazo que serán aprovechadas por generaciones futuras, tanto o más que por la actual.

Estas lecciones pueden no ser exactamente las mismas que planteó en su momento la Comisión. Pero, su trabajo sienta las bases para comprender de manera plural la esencia profunda del país. El diagnóstico que la CVR ofrece sobre la naturaleza y dinámica social del país es agudo y certero. Ahí se hallan las causas a defender; constituye un programa democrático e integrador de largo aliento.⁷⁵

Al plantear así las cosas, este parecer sostiene que las conclusiones de la CVR sobre la violencia habrían creado un metarrelato colectivo-nacional; habría ofrecido una historia comprensiva, muy completa y ordenada en función holista, con argumento que ata todo el contenido y con miles de casos que refuerzan las ideas principales. Por ello, su trascendencia se proyecta en el tiempo y ha de durar un largo periodo.

En contraste, sus detractores no habrían elaborado un discurso integral, carecerían de explicación de fondo sobre el periodo de la violencia. No podrían recordar sistemáticamente porque tienen mucho por ocultar. Los diarios y periodistas que atacan sin cesar a la CVR desarrollan un planteamiento muy agresivo, expresado en unas cuantas consignas que repiten una y otra vez hasta lograr adormecer a la opinión pública. Pero, no poseerían un relato, una explicación redonda y su discurso se desvanece

72. Entrevistas a Gustavo Gorriti y María Elena Castillo.

73. Entrevista a Rosa Villarán.

74. Rosa Villarán, María Elena Castillo y Marcelo Puelles.

75. Gustavo Gorriti.

en la falta de memoria. Es la prédica de mantener vivos los odios, pero olvidar las causas y consecuencias. Así, el país perdería capacidad para asimilar y de cambiar para mejor.⁷⁶

2.- LAS RECOMENDACIONES EN LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

Desde su creación, la cobertura periodística referida a la Comisión ha sido fluctuante en el tiempo, ha atravesado etapas distintas. Por ejemplo, en ocasiones fue un objeto altamente publicitado, en contraste con otros momentos en que estuvo casi desaparecida. Sus apariciones públicas tuvieron elementos de estrellato mediático, donde primaba la inmediatez de la noticia antes que el análisis de los hechos y su trascendencia. Para lograr este efecto, los periodistas entrevistaban regularmente a las mismas personas, partidarias unas y opositoras las demás, con el fin de mantener caldeado el ambiente.⁷⁷

Lo cierto es que, antes de la difusión del Informe Final, el debate en torno a la CVR se concentró en polemizar sobre la necesidad para el país de crear una institución de esta naturaleza, cuestionar la idoneidad de sus miembros y la implicancia legal de sus investigaciones. Como pudimos analizar en el caso de Ayacucho, el debate fue muy vivo y los opositores a la Comisión no esperaron sus resultados y conclusiones.

Desde su conformación y a lo largo de sus labores, la CVR fue duramente cuestionada en términos esenciales: se decía que no debía existir, que su naturaleza misma era funesta para el país, que no traería nada bueno sino una cadena de resentimientos contra los salvadores de la nación, contra aquellos héroes que habían salvado a la patria del terrorismo. En ese sentido, algunos diarios, como *Expreso* y *La Razón*, han desarrollado campañas sistemáticas de demolición de la Comisión y de sus conclusiones, manifestando una oposición sistemática a su conformación, calificándola como una «institución antidemocrática» y «pro terrorista».

De acuerdo con este parecer, la CVR sería una iniciativa de las ONG de DDHH conducidas por una izquierda moderada, calificada como «caviar». Ellos habrían sido el brazo legal de una izquierda marxista que, a través de sus vínculos ideológicos, habría tenido conexiones subterráneas con la subversión. Por su parte, en esta prensa, aquellos integrantes de la CVR calificados como «caviares» son presentados como especialmente vengativos; la CVR habría sido el escenario ideal para el ejercicio de su rencor contra las personas e instituciones que vencieron a Sendero Luminoso en la guerra interna. Ese rencor ha sido ejercido por quienes compartían con los senderistas una ideología que hacía de la lucha de clases el eje de su planteamiento, pero que no quisieron involucrarse en la guerra como combatientes. Ellos habrían formado las ONG de DDHH.⁷⁸

De un modo curioso, esta crítica ya la habíamos visto formulada en el caso de Ayacucho. En efecto, los periodistas regionales también criticaron la composición de

76. Gustavo Gorriti.

77. Entrevista a Fermín Rivera.

78. Entrevista a Rafael Rey, Ministro de Defensa en el momento de redacción de este documento, entonces Congresista de la República; realizada por el autor para «Sucedió en el Perú», emisión de 2005.

la Comisión. En ese caso era para reclamar presencia local y cuestionar a algunos de sus integrantes. Pero, la crítica local ayacuchana rescataba a otros integrantes como, por ejemplo, al presidente de la CVR, Salomón Lerner, bastante respetado por tirios y troyanos ayacuchanos. Pero, en Lima, la crítica era más radical, se centraba en el grupo denominado «caviar» y en Lerner como su principal dirigente.

Este cuestionamiento a la esencia de la CVR no ha desaparecido nunca, pero se ha ido modulando de acuerdo con los cambios políticos. Por ejemplo, ahora mismo está centrado en la discusión sobre el Lugar de la Memoria. Este proyecto de museo de la memoria, dirigido por el escritor Mario Vargas Llosa, ha sido objeto de la reproducción de los conflictos desarrollados alrededor de la CVR. Pero, la evolución de la situación política ha sido el gran factor de modulación del debate periodístico alrededor de la Comisión.⁷⁹

Una vez publicado el Informe Final, hubo un momento inicial de gran interés mediático, pasado el cual, el tema mismo de la CVR ha ido diluyéndose paulatinamente en los medios de comunicación capitalinos. Al igual que en el caso de Ayacucho, la CVR se ha vuelto una efeméride, se la recuerda en los días en que se cumplen aniversarios y luego se pierde en los anaqueles hasta la próxima temporada. Para algunos periodistas, esta dinámica es fruto de la falta de compromiso de los hombres de prensa con la problemática de los DDHH. No habría formación profunda en los periodistas y muchos pecarían de vana superficialidad.⁸⁰

Pero, esta virtual desaparición de la problemática de DDHH en los medios de prensa de alcance nacional no parece provenir de los hombres de prensa, sino de la línea editorial de los medios, dirigida por los intereses de los dueños. Las líneas editoriales sientan la pauta y los periodistas se acomodan y, progresivamente, se van haciendo a la tónica. En este sentido, como señala María Elena Castillo, sería significativo el descenso en la formación política de los periodistas, proceso paralelo a su superior profesionalización técnica. Pero, la clave se halla en los dueños de los medios.

Ellos lograron bastante continuidad entre los años noventa y la primera década del siglo XXI, aceptando algunos cambios de propietarios comprometidos en actos de corrupción y exhibidos en los «vladivideos», pero sin cambiar realmente en nada. Así, los dueños de medios de comunicación no han mostrado ninguna inclinación a incluir los DDHH como parte de sus estrategias de comunicación en esta primera década del siglo. Por el contrario, ha sido un tema que claramente los ha incomodado.

De igual modo, en palabras de Gustavo Gorriti, otro elemento clave para entender este fenómeno recae en la dificultad de generar interés periodístico por la implementación de recomendaciones vinculadas a derechos humanos de las poblaciones andinas y alejadas de la capital. Esta dificultad se acrecienta porque, en el Perú, los medios de comunicación masiva se muestran proclives a desarrollar una tendencia amarillista en aras de aumentar los índices de audiencia y tiraje. Así, el real interés periodístico es reducido, pero se dificulta mucho más porque los dueños suelen tener propósitos mucho más sensacionalistas.⁸¹

79. La participación del Doctor Salomón Lerner en el proyecto del Lugar de la Memoria ha reavivado los debates pasados porque, como se recuerda, él fue el presidente de la CVR y recibió como pararrayos nutrido fuego graneado.

80. María Elena Castillo.

81. Gustavo Gorriti.

En ese sentido, Marcelo Puelles y María Elena Castillo señalan que los temas de la CVR tratados en los medios de prensa han sido limitados. De acuerdo con esta opinión, muchos puntos sustantivos de las conclusiones del Informe habrían quedado parcialmente ocultos. Cuando el Informe fue publicado, ellos encontraron puntos saltantes y otros que merecían estudio y detenimiento. Pero, ese proceso de investigación y publicación de nuevos casos no se ha cumplido, solo hubo interés en publicar los datos calientes. Peor aun, al convertirse la CVR y su Informe Final en una efeméride, cada año se recuerdan solamente esas «pepas» y se olvida el resto.

En realidad, en el periodo posterior a la CVR, solamente dos puntos han sido discutidos en la prensa peruana: algunos contados casos judiciales —entre los que destaca el juicio a Fujimori— y el debate en torno a las reparaciones, individuales y colectivas. Como el caso Fujimori rebasa largamente el trabajo de la Comisión y es fruto de una amplia conjunción de fuerzas, las reparaciones son, pues, el único tema estrictamente nacido de la CVR que ha merecido cierta atención periodística en el periodo posterior a la entrega del Informe Final.⁸²

3.- ENTIDADES PÚBLICAS Y RECOMENDACIONES: COMISIÓN MULTISECTORIAL DE ALTO NIVEL (CMAN) Y CONSEJO DE REPARACIONES (CR)

En agosto de 2003, la CVR entregó su Informe Final, que concluía en un conjunto de recomendaciones, centradas en tres grandes rubros: reformas institucionales, plan integral de reparaciones y judicialización de los casos por violaciones a los derechos humanos. Como vemos, en alguna medida se habría discutido públicamente dos de ellos: judicialización y reparaciones; mientras que el tema de las reformas institucionales habría tenido casi nula visibilidad.

La implementación de las recomendaciones, más de seis años luego de haberse presentado el Informe Final, es aún materia pendiente; persiste la percepción de que se ha avanzado poco hasta el momento. Ninguno de nuestros entrevistados opinó que habían caminado satisfactoriamente hacia su cumplimiento pleno. Todos ofrecían explicaciones sobre las causas de este retardo, aceptándolo como hecho establecido. Pareciera que la clase política realmente ha estado poco interesada en llevar a la práctica estas recomendaciones.

Así, un punto clave es la razón para esta falta de interés en los DDHH de parte de los políticos con poder. Comprender esta pregunta implica considerar que no hay una sola respuesta. Varias son las razones y depende de qué actor político estemos hablando. En primer lugar, los políticos medios de prensa fujimoristas tienen evidentes intereses políticos en una restauración del autoritarismo y son enemigos declarados de la CVR por representar su caída y enjuiciamiento. Por su parte, el ex presidente Toledo era especialmente débil cuando fue publicado en Informe Final; disponía de una bajísima aceptación popular y lo amenazaba la sombra de la destitución legal. En ese contexto, decidió no abrirse más flancos y optó por guardar el Informe en una gaveta. Finalmente, el presidente García está chamuscado por varios casos emblemáticos de su primer periodo y prefiere ignorar el asunto.

82. María Elena Castillo y Marcelo Puelles.

Entrando en detalle, resulta que algunas recomendaciones han tenido mejor suerte que otras, que simplemente duermen en el rincón del olvido. El compromiso del Estado con las víctimas de la violencia ha sido muy limitado. Se esclarecieron los hechos gracias a la CVR y, a continuación, el mismo Estado dejó caer sus conclusiones y recomendaciones en saco roto, porque faltó voluntad política para ejecutarlas. El escaso interés de los Gobiernos de los 2000 en los DDHH hizo que el trabajo de la Comisión perdiera respaldo político y saliera de la esfera estatal para volver a ser un reclamo de fuerzas opositoras. Bandera de lucha y no política pública.

Con respecto a la judicialización de violaciones a los DDHH, si bien es cierto que se han producido avances, los entrevistados señalan que estos juicios se encuentran actualmente en una fase de pronunciado retroceso, que se hace evidente con las recientes sentencias absolutorias otorgadas a miembros de las FF. AA. comprometidos con crímenes cometidos durante la época de violencia. De tal manera, que, aunque se haya cumplido con abrir investigación ante el Ministerio Público a los presuntos responsables de los crímenes investigados por la CVR, al haberse dilatado en el tiempo, estos juicios han terminado favoreciendo a los acusados, dejándoles abierta la posibilidad de alcanzar la impunidad.⁸³

En el Poder Judicial, los procedimientos han resultado fundamentales para ir dilatando los procesos y finalmente lograr absoluciones. Los abogados de los supuestos violadores de DDHH no han cuestionado el fondo de las acusaciones fiscales, que provienen de las conclusiones de la CVR, sino que han trabajado legalmente sobre los mecanismos procedimentales para lograr postergar audiencias, cuestionar pruebas e ir retrasando conclusiones judiciales.

Como consecuencia, los encausados por la CVR han ido obteniendo un tiempo político más favorable, ya que la evolución política de esta primera década del siglo XXI ha sido de pronunciado desdén oficial por los derechos humanos. Esa estrategia legal ha facilitado que los abogados levanten cargos sin realmente enfrentarlos. La orientación política de los acusados no fue encarar las acusaciones de frente, sino que eligieron una vía lateral que viene resultando exitosa.

Por otro lado, las instituciones creadas en materia de reparaciones a las víctimas de la violencia y el mismo marco legal que las ampara han sufrido una serie incesante de modificaciones, que han afectado la implementación del Plan Integral de Reparaciones (PIR) recomendado por la CVR. Así, este proceso se ha desarrollado en diversas etapas que no guardan necesariamente coherencia. Por su parte, el PIR constituye uno de los proyectos clave, ya que el Estado se hace responsable de reparar las violaciones de derechos humanos cometidas en el país entre 1980 y 2000. Por ello, este programa sintetiza y refleja el verdadero nivel de asimilación de parte de los agentes públicos en la proposición que establece alguna responsabilidad por la violencia en el Estado peruano.

La lentitud de ejecución del PIR reposa en la inestabilidad en la toma de decisiones políticas de los Gobiernos de esta década. Ello ha propiciado una implementación defectuosa e incompleta. Por ejemplo, los dos Gobiernos nacionales últimos, de Toledo y García, han decidido ejecutar las reparaciones colectivas en detrimento del resarcimiento económico individual estipulado en el PIR. Ahora mismo, el Estado manifiesta disposición a ejecutar reparaciones de carácter simbólico y aquellas de salud y educación, antes que el tipo de reparaciones priorizado inicialmente en el PIR.

83. María Elena Castillo y Marcelo Puelles.

En relación con el marco normativo, las recomendaciones propuestas por la CVR contemplaron la instalación de mecanismos de seguimiento que le den curso a los expedientes, impidiendo que sus conclusiones caigan en el olvido burocrático. Estos mecanismos de seguimiento se concretaron en normas e instituciones para coordinar y ejecutar las políticas integrales de reparaciones propuestas en el PIR.

Es así como, en febrero de 2004, se creó la Comisión Multisectorial de Alto Nivel (CMAN), que dio inicio a este proceso. Aunque, lamentablemente su actuación ha sido profundamente volátil, fruto de las imprecisiones contenidas en la normas que regulaban sus funciones y atribuciones. Esas imprecisiones fueron la causa para sucesivas modificaciones, que se realizaron en cuatro oportunidades, entre los años 2004 y 2006. Las marchas y contramarchas políticas en periodos relativamente cortos han impedido un trabajo más productivo de la entidad.

Posteriormente a la formación del CMAN, el Estado peruano promulgó la Ley N.º 28592, emitida en julio de 2005. Esta norma creó el Consejo de Reparaciones, cuya función ha sido encargarse de elaborar el Registro Único de Víctimas (RUV) según los criterios señalados en la mencionada norma. Es decir, en forma progresiva y a tientos, finalmente el Estado ha constituido un organismo encargado de un registro de víctimas y un programa específico para resarcir a esas personas. Todo ello estaba planteado en forma clara en las conclusiones de la CVR.

Sobre estas instituciones, las opiniones de los entrevistados apuntan a señalar que la creación de las mismas ha promovido un significativo avance en la implementación práctica de las reparaciones, pero que la falta de compromiso del Estado ha generado que el rol asignado al CMAN y el CR no haya sido cumplido a cabalidad. Son entidades de perfil muy bajo, con escasa capacidad para hacerse oír en el mismo aparato del Estado.

La falta de compromiso estatal se ha hecho evidente con el recorte presupuestal que ha sufrido el Consejo de Reparaciones y que ha producido la interrupción del registro de víctimas. Así, no se ha culminado con este importante instrumento. De otro lado, nuestro entrevistado Marcelo Puelles señala que los avances sobre este punto, pese a los obstáculos, responden a la iniciativa personal de algunos integrantes del Consejo de Reparaciones, antes que al apoyo gubernamental.⁸⁴

Complementariamente, María Elena Castillo califica a la CMAN como una institución de fachada sin mayor contenido concreto ya que, en la práctica, según su apreciación, sería la presión de las organizaciones civiles, en particular las conformadas por los afectados del conflicto armado, las que han hecho posible incorporar en el ámbito político el interés por los DDHH. Por consiguiente, han sido estas entidades las verdaderas promotoras de la implementación de las recomendaciones del Informe Final de la CVR. En esta versión, el CMAN habría actuado a remolque de las organizaciones civiles interesadas en la problemática de los DDHH.⁸⁵

Así, la conclusión compartida de nuestros entrevistados es la especial precariedad del marco legal y de las mismas organizaciones del Estado surgidas de la CVR. Además, señalan que esa volatilidad y falta de sostén político habría sido intencional y ejemplifica la escasa disposición de los políticos peruanos a considerar el trabajo de la CVR.

84. Marcelo Puelles.

85. María Elena Castillo.

4.- RETRASO DE LA IMPLEMENTACIÓN

Más de seis años después de emitido el Informe Final de la CVR, dos posturas se hallan entre los hombres de prensa acerca de la implementación de sus recomendaciones. Por un lado, existe un sector de la prensa que señala la falta de voluntad política del Gobierno como factor determinante de retrasos y postergaciones. De acuerdo con este parecer, la política impide la aplicación de un Informe casi impecable. Sobre este punto, nos hallamos ante un grupo de periodistas que han tomado partido para defender el Informe Final y mayormente no lo cuestionan. Operan como reacción ante la multitud de cuestionamientos percibidos como injustamente críticos que ha recibido la CVR. Consideran políticamente correcto el Informe y ocupan su puesto para defenderlo de críticas interesadas y mal orientadas.⁸⁶

En segundo lugar, un sector minoritario pero muy influyente de la prensa, además de considerar relevante el factor político —sin negar su importante influencia—, también critica la «actitud canónica» que se le ha atribuido al trabajo realizado por la CVR. Según opinó Gustavo Gorriti, el Informe Final ha sido considerado por sus redactores como una obra acabada e incuestionable, en especial en lo concerniente a las recomendaciones, siendo, por el contrario un trabajo perfectible en aspectos tanto conceptuales como técnicos. Su opinión es que la CVR ha tenido menos influencia de la debida en parte por el carácter solemne y rígido como ha sido presentado el Informe Final. No hubo tranquilidad suficiente para asumir que era una obra abierta que iría completándose en el tiempo. Se lo presentó como Informe definitivo y, lógicamente, como toda obra humana apresurada y colectiva, ha mostrado algunas limitaciones, lo que reduce su impacto.⁸⁷

Por su parte, Rosa Villarán considera que, pese a la calidad profesional de los encargados de la formulación del Programa Integral de Reparaciones, este, desde su planteamiento original, adolecía de vacíos técnicos que lo hacían vulnerable a las trabas burocráticas inmersas en los kafkianos mecanismos del Estado peruano. Según su parecer, estos vacíos técnicos y legales del PIR responden a la especialidad del equipo encargado de su formulación en la CVR, quienes destacaban por su calidad académica antes que por sus conocimientos técnico-profesionales. Habrían sobrado buenos profesores universitarios de ciencias sociales y habrían faltado hombres de leyes con espíritu práctico y conocimiento del complejo funcionamiento del Estado peruano. Por ello, el primer PIR necesitaba ser modificado y, lamentablemente, esos imprescindibles cambios han sido la oportunidad para serios retrocesos políticos.⁸⁸

Con la modificación del reglamento de la Ley N.º 28592 se pusieron en evidencia las limitaciones del planteamiento original del PIR. Estos vacíos habían sido advertidos repetidas veces por la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. En ese momento se realizaron mayores precisiones respecto de la metodología de trabajo y aplicación del programa de reparaciones. Pero, ese proceso de modificación de normas dio pie para —pese a la oposición de las organizaciones de derechos humanos— el cuestionamiento de la condición de posibles víctimas para las personas que integraron

86. Marcelo Puelles y María Elena Castillo.

87. Gustavo Gorriti.

88. Rosa Villarán.

organizaciones subversivas. La definición de víctima dejó de ser la de un ser humano que había sido abusado en sus derechos fundamentales, para pasar a ser la de un no subversivo que había sido abusado. Es decir, el subversivo perdió la condición de ser humano y se le negaron derechos comunes a los del resto de la ciudadanía peruana.

Este cambio legal dio paso a una nueva controversia, dado que en el ámbito internacional los derechos humanos no aceptan restricción alguna. En efecto, algunos integrantes de organizaciones subversivas pueden haber visto violados sus derechos humanos por agentes del Estado, en la misma medida en que estos últimos han sido víctimas de los primeros. Por ello, según la teoría internacional, en principio todos los individuos, sin restricción alguna, tienen derecho a las reparaciones por derechos fundamentales, basta probar su condición de víctima. En este sentido, un subversivo que ha sufrido la tortura es una víctima y tiene derecho a reparaciones.

De igual modo, con esta modificación se hicieron precisiones sobre el destino de algunos programas, detallándose las modalidades en que deberían ejecutarse la restitución de derechos ciudadanos y las reparaciones en educación. Además, también se modificaron los procedimientos a ser realizados por el Consejo de Reparaciones en relación con la calificación y acreditación de víctimas en el Registro Único de Víctimas, habiendo sido este último punto una exigencia del Estado para la ejecución del programa de reparaciones individuales.⁸⁹

Complementariamente, Rosa Villarán señala que lo avanzado en materia de reparaciones responde fundamentalmente al impulso y seguimiento que —desde la sociedad civil— se ha hecho a la defensa de los principios de verdad, justicia y reparación. Pero ello no hubiera podido ser posible sin el progresivo empoderamiento de variadas organizaciones civiles que, dentro de sus programas de desarrollo, incluyen un capítulo de DDHH. Estas entidades se han desarrollado en las dos últimas décadas, permitiendo que surjan actores que pugnan por alcanzar un resarcimiento moral y económico, expresado —en parte— por las reparaciones.

Aunque, Villarán discrepa de las políticas públicas en materia de reparaciones al sostener que expresan una confusión, ya que el Estado sustituye la reparación a las víctimas de la violencia con obras públicas en materia de salud y educación que se encuentra obligado a cumplir. Este es un punto clave, porque las reparaciones constituyen una señal indispensable de la reconciliación. Pero, si ellas se transforman en escuelas y postas que existen en todas partes, entonces no se produce el paso crucial que emprende el camino del perdón. Ese paso implica que la víctima sienta que quien abusó se ha arrepentido y está dispuesto a enmendarse. Caso contrario no habrá reconciliación y el PIR habrá servido para que algunas poblaciones, antes carentes de servicios básicos, los consigan, pero no cumplirá sus propósitos originales.⁹⁰

Por su parte, Gustavo Gorriti añade que al negar las reparaciones individuales y optar por las colectivas, el Estado se orienta en un sentido clientelista, modificando la naturaleza de dicha reparación y politizando la medida, porque busca intercambiar obras por lealtades políticas. A ello se suma que el Gobierno no ha cumplido con expresar su desagravio público a las víctimas de la violencia, no obstante haber sido considerada la primera señal de voluntad política para la reconciliación nacional. Paralelamente, una

89. Rosa Villarán.

90. *Ibíd.*

campaña mediática desatada en los medios de comunicación cuestiona la pertinencia de las reparaciones individuales.

Así, el Gobierno promueve un doble discurso en relación con las reparaciones, ya que por un lado muestra la «voluntad» del presidente y del primer ministro de iniciar en 2010 el programa de reparaciones individuales y, por otro, los ministros de Defensa y Economía subrayan la inviabilidad técnica y financiera de su ejecución. Todo ello parece indicar que no existió un verdadero interés por parte del Ejecutivo por cumplir a cabalidad con las recomendaciones del informe final de la CVR ya que, al interrumpirse el proceso de confección del Registro Único de Víctimas, se hace válida la justificación expresada por el Gobierno, que lo considera indispensable para que las reparaciones individuales puedan ejecutarse.⁹¹

Asimismo, Gorriti señala que hay dos razones centrales para el limitado avance de las recomendaciones, en especial en lo relacionado con el plan integral de reparaciones. Por un lado, el «secular desapego y menosprecio» por parte del Estado hacia los habitantes del Ande, desde siempre entendidos como seres humanos de segunda clase. Las dificultades en la implementación de las recomendaciones de la CVR sería consecuencia de una discriminación muy antigua, fundada en la existencia de dos sociedades en una sola. Esa dualidad sería jerárquica, solo una sociedad —la de los blancos— posee los derechos fundamentales, mientras que la sociedad indígena colonizada carece de ellos.⁹²

En segundo lugar, quienes detentan actualmente una parte sustantiva del poder son «detractores a priori» de la CVR y de todo lo vinculado a ella. La presencia de Rafael Rey en el Ministerio de Defensa y de Luis Giampietri en la primera vicepresidencia expresa el marco político que ha permitido a los opositores de la CVR obstaculizar desde el Estado la implementación de las recomendaciones del Informe Final, en especial en lo relacionado a las reformas institucionales y el PIR.

Estos dos rubros dependían al 100% del Poder Ejecutivo y, por ello, no habrían avanzado y se han trabado; mientras que la judicialización correspondía al Poder Judicial y, aunque los defensores de los poderes fácticos son muy poderosos también en este ámbito, el caso es que mantiene una autonomía relativa, lo que le ha permitido juzgar en forma impecable a Fujimori, aunque ha retrocedido en la mayoría de los otros casos de DDHH. De una manera insospechada, el Poder Judicial habría cumplido mejor con las recomendaciones de la CVR que el resto del aparato del Estado.

Por último, los entrevistados señalan que para el avance de las recomendaciones se requiere —además de institucionalizar las organizaciones encargadas de ejecutar las recomendaciones— de un mayor nivel de conciencia respecto de nuestra condición de sociedad posconflicto. Los medios de comunicación suelen olvidar esta realidad y se asume al país como un espacio social que no proviene de una guerra interna. Por ello, la aplicación de medidas de regeneración moral no resultaría vital para la convivencia humana. No se quiere recordar que el Perú es una sociedad democrática precaria, poco sólida, una de cuyas taras es que proviene de un pasado inmediato de violencia muy cruenta.⁹³

91. Gustavo Gorriti.

92. Una lectura de esta problemática en Tzvetan Todorov, *El miedo*.

93. Rosa Villarán y María Elena Castillo.

Así, la reparación y restitución a las víctimas debiera tener a su favor la exigencia moral de la sociedad en su conjunto. Ella debería ser compartida por el Estado e, inclusive, por los poderes fácticos, puesto que la tan ansiada reconciliación nacional permitirá abrir un nuevo camino al desarrollo en las zonas del país que fueron afectados por la guerra interna. En opinión de Gorriti, en ocasiones los poderosos del Perú no saben qué les conviene, son una clase que no se caracteriza por su lucidez.⁹⁴

5.- NUESTROS DÍAS

El seguimiento a las recomendaciones del informe final de la CVR no constituye en la actualidad un tema de interés en los medios de comunicación masiva de Lima. Esta indiferencia representa un obstáculo en la promoción y defensa de su implementación, siendo escasos los espacios donde se hace difusión en torno al tema, lo cual no permite hacer un rastreo de la real situación que ellas atraviesan.

Pero, en compensación, las nuevas tecnologías de la información han abierto un nuevo espacio para el seguimiento de las recomendaciones de la CVR, convirtiéndose en los nuevos canales de difusión a favor de la defensa de los derechos humanos. La temprana incursión en los medios electrónicos por parte de las ONG peruanas ha permitido que, en estos nuevos medios de información, la batalla de ideas sea mucho más favorable a los DDHH que en la prensa escrita nacional.

Paralelamente, no hemos contemplado una fuerte presión desde la sociedad para su ejecución. Para ello, se han sumado factores. Por un lado, la falta de compromiso de los políticos que efectivamente han ejercido el poder en esta década, salvo la excepción de Paniagua. En segundo lugar, la pérdida de protagonismo de las fuerzas políticas y sociales interesadas en el avance de las recomendaciones de la CVR. Así, al día de hoy, y en las puertas de la campaña electoral de 2011, resulta impensable imaginar que el Estado peruano ejecute reformas radicales que corrijan los problemas estructurales encontrados por la CVR.

De otro lado, las señaladas falencias de carácter técnico contenidas en el diseño del Plan Integral de Reparaciones, si bien han perjudicado el trabajo de las instituciones encargadas de la ejecución del PIR (CMAN y CR), han tenido como su principal utilidad política la de servir de razón para el actual Gobierno para postergar la implementación del PIR. De igual modo, el diseño del Registro Único de Víctimas se ha remitido a decisiones políticas, que han reformulado los criterios para ser considerado efectivamente como víctima, como el caso de la exclusión de los subversivos del registro.

Por último, las recientes acciones en torno al cierre del Consejo de Reparaciones ponen en evidencia la decisión política de parte del Gobierno de García de paralizar los avances en torno a las recomendaciones de la CVR. El Gobierno parece considerar que el proceso de implementación ha llegado a un tope, más allá del cual nada se debe hacer.

Estas decisiones políticas obedecen a la presión del sector más conservador del Gobierno en relación con los DDHH, donde destacan los grupos vinculados a los poderes fácticos que, en el ámbito judicial, han promovido sentencias absolutorias a miembros de las FF. AA. involucrados en violaciones a los DDHH. Asimismo, estas fuerzas han pugnado dentro del Gobierno por detener el avance del proceso de reparaciones.

94. Gustavo Gorriti.

Han podido hacerlo porque el Gobierno del APRA funciona como una coalición, integrada por sectores políticos que disfrutaban de cuotas de poder. En este sentido, toda la problemática de los DDHH habría ido cayendo en manos de un sector recalcitrante que no desea dejar atrás la etapa de la guerra a muerte, por el contrario, constantemente buscan revivirla.

CONCLUSIÓN

A CONTINUACIÓN HEMOS ORDENADO UN BALANCE de los conceptos que surgen de la presente investigación. Consideramos que siete nociones se desprenden del debate precedente:

1. La CVR despertó muchas expectativas, bastante más de las que podía cumplir. En realidad, nunca dispuso de demasiado poder. Sus decisiones no eran vinculantes y sus recomendaciones no han sido llevadas a la práctica con decisión. Nació en un momento político excepcional y, desde entonces, la lucha por los DDHH le importa poco a los gobernantes. Pero, las expectativas que despertó fueron elevadas. La guerra interna había sido ocasión para múltiples abusos e innumerables momentos de humillación y dolor. La gente creyó, quiso creer, que con la CVR se restituiría a las víctimas y vendría una época de reconciliación. Lamentablemente, ello ocurrió en escasa medida.

A continuación, la gente común y corriente experimentó una decepción que, progresivamente, fue cambiando los recuerdos sobre el periodo de existencia de la CVR. De una manera inconsciente, los actores han reconstruido sus posturas frente a la CVR, tomando en consideración el resultado final de su trabajo. Ahora hay menos entusiasmo que antaño. Este fenómeno ha producido un cierto anacronismo, según el cual el pasado se reconstruye en función de los pensamientos del día. Así, progresivamente se acentúa la crítica por parte de sus enemigos y se vuelve más tibia la defensa de sus amigos. Los defensores de la CVR aceptan en forma casi natural que hubo fallas y pasan a explicarlas, situando el aporte de la Comisión en su proyección a futuro. La ausencia de reparaciones en serio ha ensombrecido el balance de su actuación.

2. Los periodistas de la posguerra formaron su punto de vista durante los enfrentamientos o incluso antes de ellos. La postura de hoy es una prolongación de posiciones adoptadas ayer. En este sentido, para entenderlos es preciso situarlos en el largo plazo, solo un horizonte amplio permite comprender las posiciones actuales de los periodistas que siguen los temas de la CVR.

Por su parte, los medios de prensa se han transformado. Han aparecido conglomerados que en forma paralela incursionan en impresos, radio y

televisión. Estos conglomerados han aparecido tanto en Lima como en provincias. Esta mayor variedad ha permitido cierta pluralidad que hoy día es bien vista por el público. Por ello, se escuchan distintas voces que dialogan, cuando no polemizan en el mismo medio. Este proceso de transformaciones ha significado que la CVR ha sido considerada de distintas maneras, proyectándose como un tema controvertido. Ha levantado un debate que no se ha extinguido.

Pero, los dueños de los medios han cambiado menos que la estructura de su negocio. Con pequeños cambios, siguen siendo los mismos empresarios que participaron de la gran corrupción impulsada por Vladimiro Montesinos desde el SIN en los años noventa. No son particularmente afectos a los temas de DDHH, sino todo lo contrario. Salvo excepciones, han hecho lo posible por pasar la página y no volver sobre las recomendaciones de la CVR.

Los dueños de los medios de comunicación actúan sobre un terreno abonado. En efecto, en gran parte de la ciudadanía predomina una sensible indiferencia con relación al terrorismo y sus víctimas. Ellas son proyectadas como pertenecientes al mundo andino, que recibe el desprecio y racismo de la mayoría nacional. En otras personas, que han estado bastante más cerca de la violencia, el recuerdo de la guerra es una carga, de la que buscan desembarazarse. Por ello, también son refractarios a la problemática de los DDHH y contribuyen a la indiferencia general. Ese desapego del público consumidor de medios ha facilitado que sus dueños tiendan a suprimir las noticias sobre la CVR, hasta reducir su impacto.

3. Las ONG han contribuido poderosamente a la imagen de la CVR en la prensa. Las instituciones de DDHH fueron muy visibles durante la guerra y fueron conceptuadas por los combatientes como terceristas, evitando el compromiso y buscando construir una tercera opción. Luego, durante el periodo de funcionamiento de la Comisión, los periodistas amigos de las FF. AA. o de los insurrectos han interpretado que ese tercerismo se hacía fuerte en la CVR. Por ello, han rechazado sus conclusiones y se las han atribuido a los intereses de las ONG en esta materia.

Por su parte, las ONG han desplegado un conjunto de iniciativas de mayor dimensión, impacto y visibilidad de lo que es habitual para este tipo de entidades en otros países del planeta. Este efecto es consecuencia del desplome del sistema institucional peruano desde los años noventa, proceso que continúa adelante sin mayor recuperación. El vacío resultante ha sido parcialmente cubierto por las ONG, que por esta causa han despertado todo tipo de celos en otras instituciones sumamente disminuidas. Entre otras, los mismos partidos políticos que no han superado la crisis de representación de los años noventa. Por ello, los partidos políticos que han dispuesto de poder durante esta primera década del siglo XXI recelan de las ONG y, por extensión, de la CVR.

De este modo, las ONG han dispuesto de pocas oportunidades para hacer llegar su voz a los medios de comunicación. La mayor parte de dueños de

medios ha preferido no involucrarse con ONG de DDHH y sus campañas han tenido poco eco. Así, la CVR no ha tenido quien sostenga campañas de prensa orientadas a fortalecer sus conclusiones y recomendaciones.

4. Como vemos, la clase política no ha tenido una buena relación con el Informe Final de la CVR. Además de lo anotado más adelante, se suma la crítica de la CVR al desempeño de los partidos durante la guerra interna. Esta apreciación se fundamenta en audiencias que fueron tensas y en un tomo, el III, del Informe Final. En este volumen, el juicio crítico es severo; los partidos políticos quedan mal parados. Los que fueron Gobierno, por no entender el desafío senderista y haber permitido que los militares aplicaran una estrategia que implicó desapariciones. Los que fueron oposición tampoco comprendieron el fenómeno, menos que nadie las izquierdas que, por afinidad ideológica, no denunciaron con vigor el carácter letal del terrorismo. Así, todos los líderes políticos tienen alguna queja contra las conclusiones de la CVR. Por ello, han tendido a minimizar sus recomendaciones y a ignorar el análisis.

Los políticos con poder se han apoyado sobre un estado de ánimo que recorre a la ciudadanía con respecto a los recuerdos de la guerra interna. Sobre todo en Ayacucho, muchas personas prefieren olvidar. Consideran que fue un periodo horrible, que costó soportar y prefieren evadir, sin ejercitar la memoria. Creen que, olvidando, los horrores no volverán a aparecer.

Así, para aplicar las recomendaciones de la CVR se hubieran requerido políticos comprometidos, dispuestos a correr un cierto riesgo enfrentando a una ciudadanía poco convencida. Por el contrario, los políticos con poder eran poco afectos a las conclusiones de la CVR y se pusieron a tono con el ánimo predominante en la ciudadanía, minimizando el Informe de la Comisión.

5. Los periodistas y medios de prensa afectos a las FF. AA. son críticos del Informe de la CVR. Ellos sostienen que las instituciones armadas fueron convocadas por los políticos civiles para defender el orden constitucional; en consecuencia, su actuación representa al Estado peruano en este combate. No son una fuerza beligerante similar a los insurrectos; por el contrario, las FF. AA. emanan del Estado y su norte ha sido defender a la sociedad peruana frente a una insurgencia ilegal y asesina. Quizá ha habido excesos, pero no se ha desarrollado una estrategia criminal de parte del Estado. Así, la tesis de la población civil atrapada entre dos fuegos sería falsa. No existieron dos fuegos equivalentes, sino un combatiente ilegal que atacó por la espalda y unas FF. AA. que reaccionaron para defender Estado y sociedad.

Para este sector del periodismo, las conclusiones de la CVR fueron parcialmente equivocadas, porque enfatizaron en la judicialización de casos de violaciones a los DDHH. En algunos de estos casos emblemáticos se habría incurrido en el error de enjuiciar a muchos militares, quienes lo único que hicieron fue disparar en medio de una guerra cruenta que peleaban por encargo de la misma sociedad que ahora los procesa. Así, este periodismo

concluye que el Informe es cuestionable, porque no contiene el punto de vista de los protagonistas principales de la guerra, de aquellos que defendieron al mismo Estado, como son las FF. AA. Esta conclusión refuerza su oposición al Informe y su compromiso por evitar que se apliquen sus recomendaciones.

6. Los periodistas comprensivos con los insurgentes también son críticos del Informe Final de la CVR. En este caso, la idea es que no toma en cuenta las motivaciones de los rebeldes. Les achaca haber comenzado la violencia por decisión propia, originada en un fanatismo ideológico. La CVR habría entendido pero no habría querido darle peso a las causas estructurales de la guerra: el hambre, la explotación y la humillación de las masas marginadas. Por ello, a pesar de entender el fondo estructural de la violencia, para la CVR, la causa última de la guerra habría estado en la voluntad de los insurrectos. Este análisis, según los defensores de los rebeldes, oscurece la motivación pura e idealista de los levantados en armas. De acuerdo con este parecer, los insurgentes, como querían mucho al pueblo, buscaban liberarlo y, como sus cadenas eran oprobiosas, empezaron a disparar, asaltar comisarias y asesinar pequeñas autoridades. Vinieron las represalias y se armó una cadena de venganzas que fueron escalando el horror. Así se llegó a matanzas colectivas y coches bomba. Pero, en el origen, había amor y sentimientos positivos de solidaridad con el oprimido. De acuerdo con este punto de vista, estas motivaciones deberían haberle servido a la CVR como atenuantes de las acciones armadas. El terror habría sido un exceso de bondad.

Para este sector del periodismo, el Informe Final es un error porque contribuye a la criminalización de la rebeldía. En esta interpretación, el Informe tendría algo de paradójico. Por un lado, reconoce profundas causas para indignarse, pero niega el camino armado y lo condena. No obstante, el Informe reconocería los siglos de colonialismo interno sin interrupción que, para los defensores de Sendero, son la justificación moral del levantamiento. Así, para los simpatizantes de los insurrectos, el Informe tampoco es aceptado como objetivo y ponderado. Por el contrario, es pintado como un instrumento para sacar de la historia a la rebelión. El Informe de la CVR habría negado el antiguo derecho a levantarse contra las injusticias de este mundo.

7. De este modo, ante la opinión pública peruana, después de la conclusión del trabajo de la CVR y habiendo emitido esta su Informe Final, dos oposiciones han condenado sus conclusiones y recomendaciones. Ambas posturas provienen de simpatizantes con el accionar de las FF. AA. y de Sendero. Resulta singular que estas dos posturas compartan un punto tan importante como es el balance de la CVR. Normalmente no coinciden en nada pero, he aquí que este tema concita una apreciación semejante. En realidad, solo caben dos respuestas. Una, que el Informe efectivamente constituya un punto de vista de una tercera fuerza social y política que niega la validez de ambos contendientes. La segunda opción es que esta unanimidad exprese

el carácter ponderado del Informe, porque habría captado el voluntarismo terrorista de unos y los excesos brutales de los otros.

En este sentido, las voces de los defensores de los DDHH enfatizan en esta coincidencia para probar que, en realidad, la sociedad habría hallado un equilibrio sobre el pasado inmediato del país gracias a la versión de la CVR. En esta interpretación, su aporte sería un relato coherente de las causas y del periodo de violencia más sangriento de la historia republicana del país. Sin negarle a las FF. AA. su papel como institución orgánica del Estado ni tampoco a los insurrectos sus motivaciones políticas, la CVR habría concluido encarando a ambos por no haber respetado la vida de muchos civiles que cayeron víctimas de abusos de todos los que disponían de armas. Los señores de la guerra no respetaron leyes ni procedimientos democráticos, sino que trataron de imponer su voluntad a la fuerza, cometiendo grandes abusos.

Por ello, los defensores de la CVR rescatan la solidez del Informe, su capacidad inspiradora y la enorme recolección de materiales sobre la guerra. Por un lado, se trata de una enorme fuente para estudios que ya se han emprendido y que han de continuar. Estos estudios están formando un corpus peruano de estudios sobre el terrorismo y sus horrores, que es nuestra contribución a la historia mundial de la infamia. Pues bien, en esa tradición intelectual en construcción, la CVR constituye tanto punto de partida como fuente y ahí se hallan miles de testimonios de todos los actores de la guerra para ejemplificarlo.

En esta interpretación, la CVR habría abierto una puerta que lleva a un camino que el Perú ha de recorrer para lograr la reconciliación. Esta no proviene automáticamente del conocimiento de la verdad, sino que implica una actitud mental de todos los actores en busca del perdón. Quizá es algo temprano, pero el camino está claro y es fruto de esa apertura y limpieza mental que proviene del trabajo de la CVR.

BIBLIOGRAFÍA

CUETO CÁRDENAS, Mario

2009 *Ayacucho: prensa y violencia*. Ayacucho: s/e.

CVR

2002 *En busca de la verdad y reconciliación*, *Boletín de la CVR*, N.º 1, abril de 2002.

DELGADO, Carlos

1971 *Problemas sociales en el Perú contemporáneo*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

DEGREGORI, Carlos Iván

1990 *Ayacucho 1969-1979: el surgimiento de Sendero Luminoso*. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

GALDO GUTIÉRREZ, Virgilio

1991 *Ayacucho, conflictos y pobreza*. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga.

HJELDE, Aase

2008 *Periodismo bajo terror*. Lima: Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

MANRIQUE, Nelson

2002 *El tiempo del miedo. La violencia política en el Perú, 1980-1996*. Lima: Congreso de la República.

OVIEDO, Carlos

1989 *Prensa y subversión: una lectura de la violencia en el Perú*. Lima: Mass Comunicación.

PERALTA, Víctor

2000 *Sendero Luminoso y la prensa, 1980-1994. La violencia política peruana y su representación en los medios*. Lima: Centro Bartolomé de las Casas y SUR Casa de Estudios del Socialismo.

PORTOCARRERO, Gonzalo y Patricia OLIART

1988 *El Perú desde la escuela*. Lima: Instituto de Apoyo Agrario.

QUINTEROS, Enver

- 2003 «Ayacucho: transición democrática y la Comisión de la Verdad y Reconciliación». En Huber, Ludwig, ed., *Ayacucho: centralismo y descentralización*; pp. 251-267. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.

TODOROV, Tzvetan

- 2008 *El miedo a los bárbaros*, Barcelona: Círculo de Lectores.

VICH, Víctor

- 2001 «La literatura, la Comisión de la Verdad y el Museo de la Memoria». En *Quehacer* 132; pp. 68-71.

VILA SOUZA, José

- 1982 *Desarrollo del periodismo en Ayacucho*. Ayacucho: Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Tesis.

El Instituto de Estudios Peruanos es una asociación civil
ajena a toda actividad partidaria, religiosa o lucrativa.
Fundado en 1964, el Instituto tiene entre sus principales objetivos
la investigación, promoción y difusión de los estudios sociales
sobre el Perú y América Latina, así como los referidos
a sus relaciones con el resto del mundo.
Con estos objetivos se busca contribuir al desarrollo económico
con equidad, al fortalecimiento de las instituciones democráticas
y al respeto de la diversidad cultural del país.

